



UDH
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
<http://www.udh.edu.pe>

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

Escuela de Post Grado

MAESTRÍA EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

TESIS

**EL NUEVO MODELO PROCESAL PENAL Y LA IMPARTICIÓN
DE JUSTICIA CON CELERIDAD EN HUÁNUCO – 2016.**

**PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRO EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
MENCIÓN EN DERECHO PROCESAL**

AUTORA

CARMEN CECILIA COOK GONZALEZ

Asesor

Mg. BERAÚN SÁNCHEZ, David

Huánuco – Perú

2018



UDH
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
<http://www.udh.edu.pe>

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO Escuela de Posgrado

RESOLUCIÓN Nº 130-2018-D-EPG-UDH Huánuco, 22 de Marzo de 2018

Visto, el Oficio Nº 050-2018-D-UPG-DCCPP-UDH, de fecha 20 de Marzo de 2018, presentado por la por el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Dr. Uladislao Zevallos Acosta, quien solicita fecha y hora de sustentación de tesis de la graduando **COOK GONZALES, Carmen Cecilia**, de la Maestría en Derecho y Ciencias Políticas con mención en Derecho Procesal.

CONSIDERANDO:

Que, según el Artº 11 del Reglamento General de Grados de Maestría y Doctorado, y en concordancia con los Artº 45.4 o 45.5 de la Ley Universitaria Nº 30220, la Tesis de Grado es un trabajo de investigación inédito y riguroso, con aporte científico de relevancia y trascendencia;

Que, con Resolución Nº 281-2016-D-EPG-UDH, de fecha 15 de Setiembre de 2016, se designa al Mg. David Bernardo Beraún Sánchez, como asesor de tesis;

Que, con Resolución Nº 105-2017-D-EPG-UDH, de fecha 24 de Abril de 2017, se aprueba el Proyecto de Tesis titulado: **"NUEVO MODELO PROCESAL PENAL Y LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON CELERIDAD EN HUÁNUCO - 2016"**, quedando inscrito en el Libro de Proyectos correspondiente;

Que, con Resolución Nº 402-2017-D-EPG-UDH, de fecha 31 de Octubre de 2017, se designa a los docentes Dr. Rodolfo Espinoza Zevallos, Mg. Fernando Corcino Barrueta, y Mg. Jeremías Rojas Velásquez, como miembros del Jurado de Tesis;

Que, con Informe S/N -2017/REZ/D-UPG-DCCPP-UDH, de fecha 14/11/2017, Informe S/N, de fecha 18/12/2017, e Informe Nº 18-2017, de fecha 12/12/2017; presentados por los miembros de Jurado de Tesis Dr. Rodolfo Espinoza Zevallos, Mg. Fernando Corcino Barrueta, y Mg. Jeremías Rojas Velásquez respectivamente; quienes opinan favorable para la sustentación de la tesis;

Que, con Resolución Nº 001-2018-D-EPG-UDH, de fecha 23 de Enero de 2018, se declara expedita a la graduando **COOK GONZALES, Carmen Cecilia** para optar el Grado Académico de Maestra en Derecho y Ciencias Políticas con mención en Derecho Procesal;

Que, con Oficio Nº 050-2018-D-UPG-DCCPP-UDH, de fecha 20 de Marzo de 2017, el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, propone al Dr. Rodolfo Espinoza Zevallos (Presidente), Mg. Fernando Corcino Barrueta (Secretario) y Mg. Jeremías Rojas Velásquez (Vocal), como miembros del jurado para la sustentación de la tesis, señalando lugar, fecha y hora; y,



UDH
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
<http://www.udh.edu.pe>

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
Escuela de Posgrado

RESOLUCIÓN N° 130-2018-D-EPG-UDH
Huánuco, 22 de Marzo de 2018
Pg. 02

Estando a las atribuciones conferidas al Director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Huánuco, con cargo de dar cuenta al Consejo Directivo:

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Sustentación de la tesis titulada **"NUEVO MODELO PROCESAL PENAL Y LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON CELERIDAD EN HUÁNUCO - 2016"**; de la graduando **COOK GONZALES, Carmen Cecilia**, para optar el **Grado Académico de Maestro en Derecho y Ciencias Políticas con mención en Derecho Procesal**; fijándose para el día Martes 27 de Marzo de 2018, a horas 07:00 pm. en el Auditorio de la Universidad de Huánuco, ubicado en el Jirón Dos de Mayo cuadra 6 – Huánuco.

Artículo Segundo.- Designar, como Jurado para la Sustentación de Tesis, en la Universidad de Huánuco, a los siguientes docentes:

Dr. Rodolfo ESPINOZA ZEVALLOS
Mg. Fernando CORCINO BARRUETA
Mg. Jeremías ROJAS VELÁSQUEZ

Presidente
Secretaria
Vocal

Regístrese, comuníquese y archívese.



Dr. Víctor Domínguez Condezo
DIRECTOR EPG



Mg. Maximiliano Cruz Huacachino
SECRETARIO DOCENTE

Distribución: Rectorado/Vicerrectorado/UPGDCCPP/OMR/Jurado/Interesada/File Personal/Archivo.
VDC/bldr



UDH
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
<http://www.udh.edu.pe>

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE
DERECHO Y CC.PP.

ACTA DE SUSTENTACIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

En la ciudad de Huánuco, Auditorio de la Universidad de Huánuco, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 19:00 horas, los Jurados, docentes en la Universidad de Huánuco, Dr. Rodolfo ESPINOZA ZEVALLOS, Presidente, Mg. Fernando CORCINO BARRUETA, Secretario, y Mg. Jeremías ROJAS VELASQUEZ, Vocal, respectivamente; nombrados mediante Resolución N° 130-2018-D-EPG-UDH, de fecha veintidós de marzo del año dos mil dieciocho y la aspirante al Grado Académico de Maestro, **Abg. Carmen Cecilia, COOOK GONZALES**.

Luego de la instalación y verificación de los documentos correspondientes, el Presidente del jurado invitó a la graduando a proceder la exposición y defensa de su tesis intitulada. **"NUEVO MODELO PROCESAL PENAL Y LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON CELERIDAD EN HUÁNUCO - 2016"**, para optar el Grado Académico de Maestro en Derecho y Ciencias Políticas, mención **Derecho Procesal**.

Concluida la exposición, se procedió a la evaluación correspondiente, luego el Presidente del jurado comunicó el resultado, habiendo obtenido la nota 17 con la calificación de MUY BUENO; al mismo tiempo recomendó a la Escuela de Post Grado, se le otorgue el grado académico de Maestro en Derecho y Ciencias Políticas, con mención en **Derecho Procesal**, a la graduando **Abg. Carmen Cecilia, COOOK GONZALES**.

Se suscribe la presente Acta en tres originales y siendo las 20:00 horas, se da por concluido el acto académico de sustentación.

PRESIDENTE

Dr. Rodolfo ESPINOZA ZEVALLOS

SECRETARIO

Mg. Fernando CORCINO BARRUETA

VOCAL

Mg. Jeremías ROJAS VELASQUEZ

DEDICATORIA

Dedico esta tesis a Dios, a mi esposo e hija.

A Dios porque ha estado conmigo a cada paso que doy, cuidándome y dándome
fortaleza para continuar.

A mi esposo e hija por ser mi apoyo en todo momento, depositando su
confianza en cada reto que se me presenta sin dudar de mi capacidad.

Los amo con mi vida.

AGRADECIMIENTO

La presente tesis va dirigida con una expresión de gratitud para mis distinguidos maestros que, con nobleza y entusiasmo, vertieron todo su apostolado en mi alma.

ÍNDICE

| | | |
|---|-------------|------------|
| Dedicatoria | Pág. | 002 |
| Agradecimiento | | 003 |
| Resumen | | 006 |
| Abstrac | | 008 |
| Introducción | | 010 |
| Capítulo I. Planteamiento del Problema | | |
| 1.1. Descripción del problema | | 011 |
| 1.2. Formulación del problema | | 012 |
| 1.3. Objetivo general | | 012 |
| 1.4. Objetivos específicos | | 012 |
| 1.5. Trascendencia de la investigación | | 013 |
| 1.6. Limitaciones de la investigación | | 013 |
| 1.7. Factibilidad | | 014 |
| Capítulo II. Marco Teórico | | |
| 2.1. Antecedentes de la investigación | | 015 |
| 2.2. Bases teóricas | | 015 |
| 2.3. Definiciones conceptuales | | 035 |
| 2.4. Sistema de Hipótesis | | 036 |
| 2.5. Variables | | 036 |
| 2.6. Operacionalización de variables | | 037 |
| Capítulo III. Marco Metodológico | | |
| 3.1. Tipo de investigación | | 038 |
| 3.2. Población y muestra | | 039 |

| | |
|--|------------|
| 3.3. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos | 039 |
| 3.4. Técnicas de procesamiento y análisis de la información | 040 |
| 3.5. Presentación de resultados | 040 |
| Capítulo IV. Resultados | |
| 4.1. Presentación de resultados | 041 |
| Tabla N° 01 | 041 |
| Tabla N° 02 | 043 |
| Tabla N° 03 | 045 |
| Tabla N° 04 | 047 |
| Tabla N° 05 | 049 |
| Tabla N° 06 | 051 |
| Tabla N° 07 | 053 |
| Tabla N° 08 | 055 |
| Tabla N° 09 | 057 |
| Tabla N° 10 | 059 |
| 4.2. Contrastación de hipótesis general | 061 |
| Capítulo V. Discusión de Resultados | |
| 5.1. Solución del problema | 063 |
| 5.2. Propuesta | 064 |
| 5.3. Propuesta de nuevas hipótesis | 064 |
| Conclusiones | 065 |
| Sugerencias | 067 |
| Referencias Bibliográficas | 068 |
| Anexos | 072 |

RESUMEN

La presente investigación tuvo el objetivo general, determinar cómo influye la vigencia del Código Procesal Penal en la mejora de la impartición de justicia con celeridad, Huánuco 2016; el tipo de investigación tuvo enfoque cuantitativo, nivel descriptivo – explicativo, diseño no experimental, la muestra se obtuvo mediante muestra no probabilística aleatoria simple al azar, habiéndose tenido como tal a 10 Jueces y 10 Fiscales especializados en lo penal y 10 Abogados y 10 Litigantes que tienen procesos en el Módulo del Código Procesal Penal, lográndose contrastar la hipótesis general, el Principio de Celeridad es elemental dentro del Proceso Penal, sin embargo de acuerdo a lo considerado por la misma muestra conformada por el 50.0% de los Jueces y el 40.0% de los Fiscales, desde que entró en vigencia el Código Procesal Penal en Huánuco, (01 de Junio del 2012), ha mejorado el sistema de impartición de justicia, ello se debe a que los magistrados encuestados están inmersos y despliegan sus funciones aplicando esta nueva norma penal adjetiva; pero tal consideración no es compartida por el 80.0% de Abogados y el 60.0% de Litigantes, quienes desde la defensa, también tienen que utilizar esta nueva herramienta procesal penal, pero son quienes padecen las continuas reprogramaciones de audiencias, los problemas en las notificaciones y señalamiento de diligencias, las nulidades de las resoluciones y diligencias, es decir para quienes, el proceso penal no respeta el principio de celeridad procesal, por ende no consideran que exista mejora en la impartición de justicia.

En este mismo orden de ideas, si bien la muestra ha considerado que existen fortalezas entre las que se encuentran la informatización y sistematización del proceso penal, la digitalización de los procesos y la oralidad, lo que en efecto es correcto como se ha pronunciado la muestra

(Ver Tabla N° 09); sin embargo la informatización y la tecnología no es suficiente para mejorar la impartición de justicia, así como tampoco lo es la oralidad; pues también se observan una serie de debilidades que son un obstáculo para que se efectivice el principio de celeridad, como son: la falta de órganos jurisdiccionales, la carga procesal, la falta de recursos humanos (personal asistencial de Juez), (Ver Tabla N° 10).

Sin embargo, también es necesario advertir que las bondades que se advierten en el Código Procesal Penal, como una adecuada y moderna herramienta procesal, para investigar, procesar y juzgar a los sujetos que cometen delito; requiere de operadores jurídicos que lo apliquen de acuerdo a los principios que legitiman en Proceso Penal plasmados desde la Constitución Política del Estado y desde la norma procesal penal, lo que se logrará con jueces altamente capacitados (Ver Tabla N° 03); se requiere que además el personal asistencial, especialista de causas, audiencias, auxiliares, notificadores, entre otro; sea el adecuado (Ver Tabla 04); lo que no ocurre pues existe una constante reprogramación de audiencias, las notificaciones defectuosas y tardías la demora en proveer recursos afectan el Principio de celeridad Procesal, (Ver Tabla N° 08)

Palabras clave: Código Procesal Penal, impartición de justicia, Juez Penal, personal asistencial, proceso penal.

ABSTRACT

The present investigation had the general objective, to determine how influences the validity of the Code of Criminal Procedure in the improvement of the delivery of justice with celeridad, Huánuco 2016; the type of investigation had a quantitative approach, a descriptive - explanatory level, a non - experimental design, the sample was obtained by sampling random simple random probability, having as such 10 Judges and 10 Prosecutors specializing in criminal matters and 10 Lawyers and 10 Litigants which have processes in the Criminal Procedure Code Module, and the general hypothesis is verified, the Principle of Celerity is elementary within the Criminal Procedure, however according to the considered by the same sample conformed by the 50.0% of the Judges and the 40.0 % of the Prosecutors, since the Criminal Procedural Code in Huánuco (June 1, 2012) came into force, has improved the justice system, this is because the judges surveyed are immersed and deploy their functions applying this new adjective penal rule; but this consideration is not shared by 80.0% of Lawyers and 60.0% of Litigants, who from the defense also have to use this new criminal procedure tool, but they suffer from continuous reprogramming of hearings, problems in notifications and prosecution, nullities of resolutions and proceedings, ie for those who, the criminal process does not respect the principle of procedural speed, therefore do not consider that there is improvement in the delivery of justice.

In the same order of ideas, although the sample has considered that there are strengths among which are the computerization and systematization of the criminal process, the digitization of the processes and orality, which in effect is correct as the sample was pronounced (See Table No. 09); however, computerization and technology is not enough to improve the delivery of justice, nor is it oral; as there are also a number of weaknesses that are an obstacle to the realization of the principle of celerity, such as: lack of jurisdictional bodies, procedural burden, lack of human resources (Judicial care staff), (See Table N 10).

However, it is also necessary to note that the benefits that are noted in the Code of Criminal Procedure, as an adequate and modern procedural tool, to investigate, prosecute and prosecute subjects who commit crime; requires legal operators to apply it in accordance with the principles that legitimize in the Criminal Procedure as set forth in the Political Constitution of the State and from the criminal procedural norm, which will be achieved with highly qualified judges (see Table No. 03); it is required that in addition the assistance staff, specialist of causes, hearings, assistants, notifiers, among others; (see Table 04); which does not occur because there is a constant reprogramming of hearings, faulty notifications and late delays in providing resources affect the Principle of procedural speed, (see Table N ° 08)

Key words: Code of Criminal Procedure, impartation of justice, Criminal Judge, personnel assistance, criminal proceedings.

Traductor de Google para empresas:Google Translator ToolkitTraductor de sitios web

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo de investigación se desarrolló el tema sobre el Nuevo Código Procesal Penal y la impartición de justicia con celeridad, Huánuco - 2016; la trascendencia de la presente investigación radicó en que se ha efectuado un diagnóstico a efectos de determinar si la vigencia del Código Procesal Penal influye en la mejora de la impartición de justicia con celeridad, pues en efecto, la vigencia del nuevo proceso penal, se dio en razón a que el modelo mixto, contemplado en el Código de Procedimientos Penales de 1940, con sus múltiples modificaciones, originó una lentitud procesal y la vulneración de una serie de principios procesales

Para el estudio, en su conjunto, se ha establecido el siguiente esquema: en el Capítulo I, se plantea el problema de investigación, los objetivos y la trascendencia de la misma. En el Capítulo II, se ha desarrollado el marco teórico, sobre el que se desenvuelve el problema investigado. En el Capítulo III, se ha desarrollado el marco metodológico, es decir el tipo de investigación, el diseño y esquema de la misma, las hipótesis, variables, la población, muestra, instrumentos y técnicas; en el Capítulo IV se presentan los resultados en tablas y gráficos con el análisis respecto por cada uno ellos, además de la contrastación de la hipótesis general, en el Capítulo V, se ha desarrollado la discusión de resultados; finalmente se exponen las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. El Decreto Legislativo N° 957, de fecha 29 de Julio del 2004, por medio del cual se expide el Código Procesal Penal, que luego de aproximadamente sesenta años de regir el Código de Procedimientos Penales de 1940, tantas veces modificado, ha sido la herramienta procesal utilizada para juzgar los sujetos que han cometido hechos delictivos, ha tenido el tránsito desde el sistema inquisitivo al mixto, con algunas normas del Código Procesal de 1991, que nunca rigió en su totalidad; ha permitido la reforma procesal penal, que demoró aproximadamente quince años.

No debemos olvidar, que esta reforma en el ámbito procesal penal, era una exigencia legal, luego de la vigencia de la Constitución Política de 1993, que plasmaba una serie de principios y decantaba la independencia de roles, ente el Ministerio Público y el Poder Judicial, pues el caos, que generó este conglomerado de normas adjetivas, no solo afectaban principios legitimadores del sistema penal, sino también un sobrecarga procesal y la lentitud de las causas tanto en la investigación fiscal, como en los juicios penales.

Es notable considerar, que por razones tanto presupuestarias como de capacitación tanto de magistrados como personal fiscal y jurisdiccional, el Código Procesal Penal, cobró vigencia en forma paulatina en el territorio nacional, siendo que en nuestra región de Huánuco, es a partir del 01 de Junio del 2012, que entró en vigencia para todos los delitos, lo que ha generado un cambio de paradigmas, respecto al anterior Código de

Procedimientos Penales, y es que a cuatro años de su vigencia, es necesario realizar un diagnóstico a efectos de verificar, si en efecto, esta herramienta procesal, ha logrado su objetivo que la impartición de justicia, sea bajo el principio de la celeridad procesal, con eficiencia y eficacia, razón por la cual surgieron las siguientes interrogantes:

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Problema General.

¿En qué medida la vigencia del Código Procesal Penal actual influye en la mejora de la impartición de justicia con celeridad, Huánuco 2016?

Sub Problemas

Sp1. ¿Cuál es capacitación de los jueces penales para la contribución de impartición de justicia con celeridad?

Sp2. ¿Cuál es la calidad del personal asistencial del módulo del Código Procesal Penal en la contribución de la impartición de justicia con celeridad?

Sp3. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la vigencia del nuevo procesal penal, que se relaciona con la impartición de justicia con celeridad?

1.3. OBJETIVO GENERAL

Determinar cómo influye la vigencia del Código Procesal Penal en la mejora de la impartición de justicia con celeridad, Huánuco 2016.

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Oe1. Conocer la capacitación de los jueces penales para la contribución de impartición de justicia con celeridad

Oe2. Determinar la calidad del personal asistencial del módulo del Código Procesal Penal en la contribución de la impartición de justicia con celeridad

Oe3. Establecer las fortalezas y debilidades de la vigencia del nuevo procesal penal, que se relaciona con la impartición de justicia con celeridad.

1.5. TRASCENDENCIA.

Consideramos que la importancia del presente trabajo de investigación, radicó en que se ha efectuado un diagnóstico a efectos de determinar si la vigencia del Código Procesal Penal influye en la mejora de la impartición de justicia con celeridad, pues en efecto, la vigencia del nuevo proceso penal, se dio en razón a que el modelo mixto, contemplado en el Código de Procedimientos Penales de 1940, con sus múltiples modificaciones, originó una lentitud procesal y la vulneración de una serie de principios procesales, por ende resultaba necesario que mediante la revisión bibliográfica de los fundamentos tanto filosóficos como jurídicos de la normativa procesal penal, que fue contrastada con la realidad objetiva, de lo que viene sucediendo en nuestra región, es decir y en efecto contribuye con una impartición de justicia con calidad, respetando la celeridad, lo que redundará en la eficiencia y eficacia de la norma penal adjetiva, por otro lado la importancia radica en que esta investigación sirve como base o antecedente para futuros trabajos sobre el tema en cuestión.

1.6. LIMITACIONES.

Las limitaciones que se presentaron en la elaboración de la presente investigación, fue respecto a los antecedentes, ya que no existen tesis o trabajos de investigación sobre el tema, del mismo modo, el material bibliográfico no es abundante, otra de las limitaciones es el factor económico ya que la investigadora no contó con beca o

subvención de entidades públicas ni privadas por ende los costos que representa son asumidos en forma personal.

- 1.8. FACTIBILIDAD.** La presente investigación fue factible, porque se tuvo acceso a la información bibliográfica tanto nacional como extranjera referida al tema, además se tuvo facilidad para aplicar el cuestionario a la muestra.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.

Se ha realizado una búsqueda referente a tesis o trabajos de investigación sobre el tema materia de este trabajo, en las bibliotecas de post grado de las universidades de Huánuco tanto la Universidad Nacional Hermilio Valdizán y la de Huánuco, no se han hallado trabajos referidos al tema; se ha efectuado del mismo modo una revisión a las bibliotecas de las principales universidades del país, no se han hallado trabajos a nivel de tesis

2.2. BASES TEÓRICAS.

2.2.1. El Código Procesal Penal. El Código penal adjetivo, vigente desde el 2004, pero que ha ido entrando en vigencia, de manera paulatina en el país y comenzó a regir en el Distrito Judicial de Huánuco desde el 01 de Junio del 2012, contiene uno de los mejores sistemas de enjuiciamiento penal moderno, basado en el principio garantista y acusatorio con tendencia adversarial; que garantiza que el procesamiento penal de una persona requiera una acusación (imputación necesaria) como autor y responsable de la comisión de un hecho delictivo, además de un juicio justo, imparcial, contradictorio con igualdad de posibilidad de ejercer los derechos previstos en la Constitución Política de Estado y el Código Procesal Penal (SAN MARTÍN CASTRO, 2014, p. 65), ello supone una clara distinción de roles, siendo los siguientes: el rol del

Ministerio Público, quien en su calidad de titular de la acción penal en los delitos perseguibles de oficio, tiene la carga de la prueba y asume la conducción de la investigación, carece de capacidad jurisdiccional y dentro del juicio tiene las mismas prerrogativas y limitaciones que el imputado y su defensa; el órgano jurisdiccional, tiene la dirección de la etapa intermedia, además del juzgamiento y expedir las sentencias, resoluciones, la imposición de penas o medidas de seguridad y la limitación de derechos fundamentales requiere de una resolución judicial motivada en derecho; por su parte, el rol del imputado y su defensa, se centra en que toda persona tiene el derecho fundamental e inalienable derecho a la defensa, es decir ser informado del delito que se le imputa, ser asistido por un abogado de su elección o un defensor público, a que se le conceda un tiempo razonable para preparar su defensa, a auto defenderse, a participar en igualdad de condiciones en la actividad probatoria, utilizar medios de prueba pertinentes conforme a ley en todo estado de la investigación y procedimiento; el agraviado tiene la garantía de una participación activa en todas las etapas del proceso y a que se le proteja, así como al resarcimiento de sus derechos afectados (LANDA ARROYO, 2014, p. 17).

Desde el día uno de Junio del año dos mil doce, en el Distrito Judicial de Huánuco, ha entrado en vigencia un nuevo proceso penal, cuyas disposiciones se encuentra plasmadas en el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957; proceso penal que a diferencia del sistema inquisitivo y mixto, que se vino aplicando desde 1940 en el Código de Procedimientos Penales, muchas veces reformado, se adopta un sistema acusatorio garantista de tendencia adversarial, tratando con ello de alcanzar por lo menos mínimos estándares internacionales,

de un proceso penal moderno, eficiente, garantizando los derechos fundamentales del imputado, (SALAS BETETA, 2012, p. 53).

2.2.2. El Modelo Procesal Penal. En efecto se ha superado a las normas adjetivas penales anteriores, por contener entre sus principios una marcada diferencia de roles por parte del representante del Ministerio Público dedicado exclusivamente a la investigación del delito y tener la carga de la prueba, además del ejercicio de la imputación y acusación al investigado, y por su parte del Juez quien se constituye como un tercero imparcial que debe resolver el caso, conforme a las pruebas que aporten tanto el fiscal como el defensor, mediante un criterio de igualdad de partes, (Roxin, 2000, p. 87); no constituye un proceso penal acusatorio y garantista en puridad, pues el Artículo 385° del citado marco legal adjetivo, deja una puerta abierta al juez, para que con criterio inquisitivo pueda ordenar la actuación de pruebas de oficio, que sin bien es cierto se producen en ciertas circunstancias como: que no se haya realizado en la investigación preparatoria o que resulte manifiestamente insuficiente, de modo excepcional, pero de oficio o a pedido de parte la actuación de pruebas que resulten útiles para el esclarecimiento de los hechos. Por ende podemos afirmar que en el Perú, aún pervive un Juez que aplica el sistema procesal penal moderno, pero conserva rezagos inquisitivos, que en casos incluso la excepción de ordenas la actuación de prueba de oficio, escapa de lo estrictamente normado en el Art. 385 del Código Procesal Penal, alejándonos de lo pronunciado por Ferrajoli, (1995), sobre los principios del sistema penal acusatorio:

“... pueden clasificarse en orgánicos y procesales, donde aquellos son relativos a la formación de juez, a su colocación institucional respecto a

los demás poderes del Estado, y a los otros sujetos del proceso; y éstos relativos a la formación y producción de las pruebas, al desarrollo de la defensa y a la convicción del órgano judicial". (p. 537)

2.2.3. La Celeridad como Principio Procesal Penal. De acuerdo a lo expresado en la Exposición de Motivos del Decreto Legislativo N° 957, por el cual se expide el Código Procesal Penal, respecto a su implementación, implica una reforma estructural y cultural, que obviamente no ha podido efectuarse con rapidez, pues el proceso de implementación no sólo se ha desarrollado a nivel normativo, sino además presupuestal y de capacitación de las instituciones involucradas en la ejecución del nuevo sistema procesal penal moderno; ya que lo que se pretende es que:

"... mediante este instrumento normativo se logre el equilibrio de dos valores trascendentes: seguridad ciudadana y garantía. Es decir por un lado dotar al Estado de las herramientas necesarias para que cumpla con su obligación de llevar adelante un proceso rápido y eficaz, que conlleve la dación de una sentencia que redefina el conflicto generado por el delito satisfaciendo las legítimas expectativas de sanción y resarcimiento y, de otro lado, que la imposición de una sentencia se efectúe con irrestricta observancia de las garantías que establecen los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que normas un procedimiento penal en un estado democrático". (EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, El Peruano 29-07-2004).

En tal sentido, de acuerdo a los estándares internacionales, sobre todo, respecto a los países del continente, que ya contaban con un sistema penal acusatorio y garantista, el país ha reformado su norma penal adjetiva, y por

ende ha renovado los Principios Legitimadores, no obstante, a ello, uno de los principios básicos, y que fue el motivo fundamental para esta nueva estructura, es la celeridad, entendida como rapidez y eficacia, que es el eje o hilo conductor de nuestra investigación.

Siendo ello así, cuando se trata del principio de celeridad, el Código Procesal Penal no lo ha definido, pero si está presente en el Artículo I del Título Preliminar, cuando en su primer inciso (...) la justicia se imparte (...) dentro de un plazo razonable; por ende, sin dilaciones indebidas; al respecto Flores Polo (2002), ha definido la celeridad en el siguiente sentido:

“Finalidad ideal que persigue todo sistema de administración de justicia, para que el proceso se desarrolle normalmente y culmine en forma pronta y oportuna, se le opone la dilación procesal, entendida como todo acto destinado a retardar la administración de justicia o la pronta y normal resolución del de un asunto sometido a la decisión jurisdiccional”

Por su parte, El derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas implica un equilibrio razonable entre el principio de celeridad y el derecho de defensa, el proceso debe desarrollarse en el menor tiempo posible, respetando el derecho a la defensa para que el imputado pueda comparecer al juicio y pueda preparar adecuadamente su defensa, por ende la celeridad procesal debe permitir que los conflictos a cargo del Poder Judicial, se solucionen de modo oportuno, pero restando las garantías procesales establecidas en la Constitución Política; por ende es uno de los elementos fundamentales del debido proceso, que contiene la tutela jurisdiccional efectiva, pues tanto la sociedad como los sujetos procesales intervinientes en el proceso esperan del

Poder Judicial la solución oportuna de sus pretensiones para una convivencia pacífica, pero además la ejecución de sus decisiones constituye la principal función de los jueces y magistrados. Se busca un proceso penal ágil, rápido y formalista en lo imprescindible, con plazos breves y perentorios, además de improrrogables, pero que logre el objetivo de una decisión eficaz y efectiva, lo que se condice con el retardo en la administración de justicia ya que el incumplimiento de plazos origina el deterioro del sistema judicial y perjudica a las partes, razón para exigir la diligencia de los órganos jurisdiccionales. El Principio de Celeridad Procesal, contiene además al principio de eficacia, economía y concentración, evitando las dilaciones, pues el proceso penal tiene que ser ágil y dinámico, evitando actuaciones innecesarias, pues el clamor de la ciudadanía es que la impartición de justicia sea rápida y eficaz, es decir basado en los criterios de economía, es decir solucionar los conflictos en tiempo razonable, pero conservando la calidad de los fallos y la ejecución de los mismos

2.2.4. Principios Procesales: Se van a desarrollar los siguientes:

Principio de Imparcialidad. En un estado democrático y de derecho la confianza en el correcto ejercicio de la función jurisdiccional, esto es, en el buen hacer de los jueces y magistrados, es básica para alcanzar el adecuado clima de paz social y convivencia pacífica entre sus ciudadanos. En consecuencia, una sociedad que desconfíe de la ecuanimidad, objetividad o rectitud de juicio de las personas encargadas de administrar justicia está destinada, irremediablemente a sufrir continuas y graves tensiones que pueden incluso, en última instancia, poner en peligro la propia existencia democrática del estado (PICÓ JUNOY, 1998, p. 17); la imparcialidad contiene la

ponderación objetiva de las pretensiones de los sujetos procesales, sin otro tipo de injerencia que lo normado en la Constitución Política y la Ley, implica una posición activa en el juicio, que le permite distinguir, además la neutralidad que corresponde a no tomar partido por ninguna parte. (TRUJILLO, 2007, p. 13), si bien al tratar el principio de imparcialidad solo se hace referencia al juez, consideramos que al fiscal también le corresponde esta imparcialidad en la investigación preparatoria, pues el tribunal constitucional peruano lo ha señalado (expediente 2288-2004-HC/TC-Lima, 12 de agosto del 2014) de la siguiente manera:

“No obstante, debe precisarse que toda actuación del Ministerio Público debe orientarse por el principio de legalidad (primer párrafo del artículo 4 de la LOMP). Que le exige actuar con respeto de las disposiciones del ordenamiento jurídico y el interés de la ley, así como por el principio de imparcialidad (artículo 19 de la LOMP), según el cual el fiscal debe actuar con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le están encomendando, no debiendo tener ningún interés particular en la dilucidación de un caso determinado”.

El numeral 1 del artículo I del título preliminar del Código Procesal Penal señala expresamente que se actúe con imparcialidad por los órganos jurisdiccionales competentes y en un plazo razonable; en efecto, una de las garantías procesales importantes es la imparcialidad con la que deben actuar nuestros magistrados, para no romper el equilibrio de la justicia que debe mantenerse incólume, lo que aleja al juzgador de toda subjetividad y descontaminado de todo acto procesal previo, a fin de emitir una decisión transparente y desprovista de toda apreciación subjetiva y

parcial.(BACIGALUPO, 2005, p. 93). Por ende esta garantía esencial de la función jurisdiccional, especialmente ligada a la preservación del principio acusatorio.

Concluyendo este tema, podemos señalar que la imparcialidad, desde nuestra perspectiva, no es exclusividad de los jueces, sino que es aplicable también a los fiscales, policías y otros funcionarios a fin de garantizar un debido proceso. Si bien el título preliminar del código procesal penal prescrito de vista, el fiscal actúa o debe su actuación con objetividad, también de nuestro punto de vista, el Fiscal actúa o debe actuar con imparcialidad en un momento del proceso penal. Así lo reafirma Sánchez Velarde, (2014), cuando explica que el principio de imparcialidad exige que el fiscal, en cuanto al órgano judicial que dirige la investigación preliminar y preparatoria, actúe como órgano neutral, asegurando a las partes su libre acceso a la causa, posibilitando en ellos la misma oportunidad de recursos y ofrecimientos de pruebas, las notificaciones, así como su intervención en las diligencias que le son propias. La imparcialidad exige al fiscal que no se incline a favor de algunas de las partes, de lo contrario, cabe que se le pida o que se inhiba o excuse de seguir conociendo el caso. (SÁNCHEZ VELARDE, 2014, pág. 74).

Este principio, contiene a su vez al de autonomía, en la medida que cada juez, dependiendo de la función que cumplen dentro del proceso penal, deben resolver con autonomía, es decir sólo bajo el imperio de la Constitución y de la Ley, por ende, el conocimiento de cada caso desde estar desprovisto de elementos subjetivos o de otra índole que tergiversen el sentido del razonamiento y valoración del juez en el caso concreto, se vincula mucho al principio de imparcialidad.

Principio de Inmediación. Este principio se encuentra vinculado al principio de oralidad por ser una condición necesaria para la realización de este, por la inmediación el Juez debe tomar contacto directo con la prueba actuada en juicio oral, (ACHMIDT, 1957, pág. 248), se requiere la presencia física de las personas, tanto del juez como de quienes van a proporcionar la información, por ende el contacto entre ambos es importante, la recepción de la prueba, para que el juzgador se forme una clara idea de los hechos y para que sea posible la defensa se requiere que la prueba sea practicada en el juicio, la inmediación es una necesidad, porque es una de las condiciones materiales imprescindibles para lograr el conocimiento integral del caso para expedir el fallo. (CUBAS VILLANUEVA, 2015, p. 47). Por ende es un principio de mayor importancia dentro del proceso penal en la medida que estructura un cambio de paradigma en la resolución de las causas que llegan al servicio de justicia, siendo un principio base de la reforma procesal penal, determinante para pasar de un sistema mixto o inquisitivo a uno acusatorio, tanto a nivel legislativo, jurisprudencial como en el frente de la lucha de prácticas, la decisión puede emanar de jueces accidentales, pedáneos, itinerantes, provisorio o comisionados, completamente desligados de los marcos emocionales del proceso que, aun en el sistema inquisitivo, no son ajenos al juez titular del oficio o cargo, (PÉREZ SARMIENTO, 2005, p. 28), principio que alcanza su máxima plenitud en el juicio oral, pues existe una verdadera concentración, unidad y oralidad al buscar que los juicios se realicen en el menor número de audiencias y que el lapso entre ellas sea el mínimo, la información proporcionada por la prueba, para ser confiable debe ser percibida directamente por los jueces, por tanto lo que se busca con este principio es que

nadie medie entre el juez y la percepción directa de la prueba, solo así se puede basar la sentencia a una persona, con prueba que se actúa sin presencia del juez no es legítima, de acuerdo a lo precisado por San Martín Castro (2014):

“El principio de inmediación, referente a la relación entre el juez y el objeto procesal, significa que la actividad probatoria ha de transcurrir ante la presencia o intervención del juez encargado de pronunciar la sentencia, si la sentencia se forma exclusivamente sobre el material probatorio formado bajo su directa intervención en el juicio oral”. (p. 120).

Este principio de inmediación se vincula con la oralidad que es la única forma que los jueces pueden conocer directamente la prueba en el juicio oral y las pretensiones, alegaciones, objeciones son a través del lenguaje hablado, a diferencia del sistema inquisitivo en que todos los actos procesales escritos, lo que favorece la delegación de funciones, la corrupción y que el juez juzgue en base a la lectura de un expediente y no a lo actuado en el juicio oral. El principio de inmediación comprende, a su vez, dos aspectos: formal referido a la observación de la prueba y la material a la valoración de la misma, (LÓPEZ BARJA DE QUIROJA, 2004, pág. 347).

Principio Acusatorio. Este principio se basa en la distribución de roles y sobre las condiciones en las que se debe realizar el proceso penal, de este modo se entiende que la función de quien acusa y juzga, no puede recaer en la persona, sino que debe efectuarse una adecuada limitación de roles pues el titular del ejercicio de la acción penal de formular acusación ante el órgano jurisdiccional penal, con fundamentos razonados y basados en las fuentes de

pruebas válidas, contra el sujeto agente del delito debidamente identificado. La dimensión práctica del acusatorio se concreta mediante el acto procesal penal que se denomina acusación, sin acusación previa y válida no hay juicio oral, por ende esta separación de funciones para el desarrollo del proceso penal: al Ministerio Público le corresponde la función requirente, la función persecutoria del delito, por ello es el titular del ejercicio de la acción penal pública y de la carga de la prueba, el contenido intrínseco al principio acusatorio, es la necesidad del requerimiento del Ministerio Público para iniciar el procedimiento, se trata de una exigencia que impide que el tribunal inicie de oficio a la investigación o someta a proceso al imputado de oficio. El juez por iniciativa propia no puede investigar o poner en marcha o impulsar el proceso. En consecuencia, el Principio Acusatorio implica la necesaria diferencia entre el ejercicio de la acción penal y el ejercicio de la potestad jurisdiccional, aunque ambas tienen una finalidad convergente: aplicar la ley penal en forma justa y correcta. Hay una diferenciación teórica, normativa y práctica entre la potestad persecutoria y la potestad jurisdiccional, por ello el titular de la potestad persecutoria del delito, de la pena y del ejercicio público de la acción penal es el Ministerio Público; en tanto que al Poder Judicial le corresponde exclusivamente dirigir la etapa intermedia y la etapa procesal del juzgamiento (BOVINO, 2005, p. 102).

Principio de Delimitación de Roles. Cuando se trata el tema sobre la delimitación de roles, la doctrina sólo ha establecido la distinción entre la función del Fiscal y la del Juez, sin embargo nada o casi nada, ha determinado, el rol y la función que debe cumplir el Juez dentro del proceso penal, siendo que la ley adjetiva que se ha elaborado mediante el proceso penal garantista,

ha dispuesto que cada juez penal, cumpla una función distinta, a efectos de evitar grados de contaminación o de prejuizamiento de la causa, lo que va a perjudicar el fin del proceso, que es el de resolver con objetividad y de acuerdo a la Constitución y la Ley, por ende le ha asignado al Juez de Investigación Preparatoria, el de efectuar el control de la etapa de investigación preparatoria, respecto al cumplimiento de plazos, formalidades, además de restricciones de derechos de los imputados, y de la observancia y respeto de las garantías y derechos fundamentales, pero además le corresponde la etapa intermedia, de controlar tanto la acusación, cuanto el sobreseimiento y realizar el saneamiento probatorio, preparando el caso para ser llevado a juicio oral, por ende este juez, no puede conocer el desarrollo del mismo, pues ya tiene conocimiento de los hechos y de las pruebas a actuarse, habiéndose formado un criterio del caso, es decir ya se encuentra "contaminado", en tal sentido, la parte estelar del proceso, que es el juicio oral le corresponde al juez de juzgamiento que puede ser unipersonal o colegiado, de acuerdo a la gravedad del delito, magistrados que no ha tenido contacto alguno con el caso, antes del día de iniciado el juicio oral (HUERTA & GUERRERO, 2003, p. 78).

Principio Adversarial. Este principio, sustenta que en un proceso penal solo las partes: fiscal y abogado defensor, se encuentran en una relación de contienda, el que acusa y el que se defiende de los cargos, son los únicos sujetos procesales que pueden presentar y actuar las pruebas, pues uno imputa y debe acreditar ello y; quien lo contradice debe desbaratar la acusación fiscal y demostrar su versión, conforme a su hipótesis, teoría o apreciaciones; ante un juez neutral o imparcial, que no rige en el sistema peruano, pues sólo tiene tendencia hacia lo adversarial, como refiere USAID;

“... cabe recordar que el nuevo diseño no corresponde a un típico proceso adversarial entre dos partes procesales que se reputa se encuentran en igualdad de condiciones; por un lado, un ente acusador, quien pretende demostrar en juicio la solidez probatoria de unos cargos criminales, y por el otro, un acusado quien busca demostrar su inocencia; ya que por una parte, el juez no es un mero árbitro del proceso; y por otra, intervienen activamente en el curso del mismo el Ministerio Público y la víctima. Cabe recordar, que en el desarrollo de la investigación las partes no tienen las mismas potestades, y la misión que corresponde desempeñar al juez, bien sea de control de garantías o de conocimiento, va más allá de la de ser un mero arbitro regulador de las formas procesales, sino en buscar la justicia material, y sobre todo, en ser un guardián del respeto de los derechos fundamentales del indicado o sindicado, así como de aquellos de las víctima, en especial, de los derechos de ésta a conocer la verdad sobre lo ocurrido, a acceder a la justicia y a obtener una reparación integral, de conformidad con la constitución y con los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad...” (2012, p. 12).

Principio de Contradicción. Se sustenta a que la actuación de pruebas de oficio, al ser ordenadas su actuación en la última etapa del proceso, sin debate previo ni mucho menos la posibilidad de recurrir, perjudican a la parte interesada, quien respecto de esta actuación no va a poder ejercer su defensa, dejando a la parte en estado de indefensión, así conceptualiza el Instituto Peruano de Criminología;

“Consiste en que tanto la parte acusadora y acusada, tengan la posibilidad efectiva de comparecer o acceder a la jurisdicción a fin de poder hacer valer sus respectivas pretensiones, mediante la introducción de los hechos que la fundamentan y su correspondiente práctica de pruebas, así como cuando se le reconoce al acusado, su derecho a ser oído, previo a la condena...” (Jurídicas, 2011, p. 19).

El principio de Igualdad de Armas. - Como lo sostiene el Profesor San Martín, es fundamental para la efectividad de la contradicción y “consiste en reconocer a las partes los mismos medios de ataque y de defensa, es decir idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación. En el actual sistema, en el mejor de los casos, es decir, en el proceso ordinario con etapa de juzgamiento el imputado está en una situación de desventaja frente al Fiscal y a los Jueces que pueden interrogar directamente y solicitar la actuación de pruebas, en tanto la defensa lo hace a través o por intermedio del tribunal; en tanto que en el proceso sumario el imputado es procesado y sentenciado sin haber tenido contacto con un defensor, es decir, en total estado de indefensión. El CPP garantiza expresamente este principio como norma rectora del proceso al disponer en el numeral 3 del Art. I del Título Preliminar: “Las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la constitución y en este Código. Los jueces preservaran el principio de igualdad procesal, debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia”. Vicente Gimeno Sendra sostiene que en su opinión “el principio de igualdad de armas es una proyección del genérico principio de igualdad que reconoce la Constitución española y del derecho a un proceso con todas las garantías que reconoce el

art. 24.2 el cual hay que estimarlo vulnerado cuando el legislador crea privilegios procesales carentes de fundamentación constitucional alguna o bien el legislador, o bien el propio órgano jurisdiccional crean posibilidades procesales que se le niegan a la parte contraria...” . Todos los ciudadanos que intervengan en un proceso penal, recibirán idéntico tratamiento procesal por parte de los órganos de la jurisdicción penal. Este principio es esencial en un sistema acusatorio adversarial cuyo desarrollo depende las partes y en el que la imparcialidad del juez está garantizada; aquí se nota con nitidez la neutralidad al punto que no puede disponer de oficio la realización del proceso, ni la realización de pruebas, salvo las excepciones previstas en la ley.

El Principio de Inviolabilidad del Derecho de Defensa. Es uno de los principios consagrados por el art. 139° inc. 14, de la Constitución está formulado en los siguientes términos: “... no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso”, además toda persona será informada inmediatamente y por escrito de las causas o razones de su detención y tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por este éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad. El artículo IX del TP del Código establece que “Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formula en su contra y a ser asistida por un Abogado Defensor de su elección o, en su caso por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad” es decir que garantiza el derecho a contar con un abogado defensor, un profesional en Derecho que ejerza la defensa técnica. Esta disposición tiende a superar las restricciones al ejercicio de este derecho en el vigente sistema

predominantemente inquisitivo en el que no sólo se restringe la defensa, convirtiéndola en un derecho opcional (art. 121° del Código de Procedimientos Penales), sino que se imposibilita su ejercicio a través del ocultamiento de la información contenida en el cuaderno o expediente, al amparo de una mal entendida reserva de las actuaciones del sumario. El nuevo Código configura el derecho de defensa desde una perspectiva amplia; es esencial garantizar este derecho porque así se posibilita el ejercicio de los demás derechos reconocidos por la Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y las normas procesales (ver art. 71°, 80° y siguientes del CPP). Para promover la efectiva vigencia de este derecho, se garantiza la asistencia de un traductor o interprete cuando no se habla el idioma del tribunal, la información del hecho, la libertad que tiene el imputado para decidir si declara o si guarda silencio; la posibilidad real y concreta que pueda comunicarse con su defensor y de contar con el tiempo suficiente para preparar su defensa y ofrecer medios probatorios y la posibilidad de recurrir.

El Principio de la Presunción de Inocencia. Constituye una de las conquistas esenciales del movimiento liberal que consistió en elevar al rango constitucional el derecho de todo ciudadano sometido a un proceso penal a ser considerado inocente (Art. 2° inciso. 24 literal e). Es uno de los pilares del proceso penal acusatorio, reconocido como el derecho de toda persona a que se presuma su inocencia en tanto no recaiga sobre ella una sentencia condenatoria. Este principio está vigente a lo largo de todas las etapas del proceso y en todas las instancias. “La presunción de inocencia ha de desplegar, pues, sus efectos en la fase instructora, impidiendo que los actos limitativos de los derechos fundamentales, en general, y la prisión provisional, en particular,

no puedan ser adoptados sin la existencia previa de fundados motivos de participación en el hecho punible del imputado y tras una resolución motivada en la que se cumplan todas las exigencias del principio de proporcionalidad”. Este principio solo puede ser desvirtuado a través de la actividad probatoria con las siguientes notas esenciales: i) la carga de la prueba corresponde exclusivamente a la parte acusadora (Ministerio Público) y no a la defensa; aquél ha de probar en el juicio los elementos constitutivos de la pretensión penal ii) la prueba debe practicarse en el juicio oral bajo inmediación del órgano jurisdiccional, con las debidas garantías procesales. El juez penal que juzga, solo queda vinculado a lo alegado y probado en el juicio oral iii) Las pruebas deben ser valoradas, con criterio de conciencia por jueces ordinarios, competentes, independientes e imparciales. Este principio está en íntima relación con el Derecho a la Libertad que la Constitución garantiza a toda persona (art. 2º inciso 24), por ello en el marco de un proceso acusatorio todas las medidas coercitivas en general y la prisión preventiva en particular, tienen carácter excepcional y provisional, sólo podrán imponerse cuando haya peligro procesal, es decir, peligro de fuga o de entorpecimiento de la actividad probatoria.

El Principio de Publicidad del juicio. Se fundamenta en el deber de que asume el Estado de efectuar un juzgamiento transparente, esto es facilitar que la Nación conozca por qué, cómo, con qué pruebas, quiénes, etc. realizan el juzgamiento de un acusado. El principio de publicidad está garantizado por el inciso 4 del artículo 139 de la Constitución Política, por los tratados internacionales, el inciso 2 del artículo I del Título Preliminar y el art. 357º del CPP. “Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y

contradictorio...”. Este principio de vital importancia es una forma de control ciudadano al juzgamiento. HASSEMER señala, además, que este principio es una forma de auto legitimación de las decisiones de los órganos que administran justicia. Consiste en garantizar al público la libertad de presenciar el desarrollo del debate y en consecuencia de controlar la marcha de él y la justicia de la decisión misma. La publicidad es considerada como una garantía del ciudadano sometido a juicio y a la vez como un derecho político del cualquier ciudadano a controlar la actividad judicial. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (S. 8-12-83) ha señalado que, “la función política de control del poder judicial que cumplen los particulares, a través de su presencia en un acto judicial público, consiste, precisamente, en la verificación del cumplimiento de las condiciones, requisitos y presupuestos jurídicos por parte de quienes desempeñan la tarea de administrar justicia”. La finalidad de la publicidad es que el procesado y la comunidad tengan conocimiento sobre la imputación, la actividad probatoria y la manera como se juzga, así la comunidad podrá formarse un criterio propio sobre la manera como se administra justicia y la calidad de la misma. La regla general es que los juicios deben ser públicos, salvo cuando sea necesario para preservar los intereses de la justicia, de este modo ha sido recogido en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8 inc. 5). Nuestra Ley señala la excepción al Principio de Publicidad cuando se trate de tutelar intereses superiores, tal es el caso del derecho al honor de una persona y en los casos de delitos contra la libertad sexual. Los juicios por responsabilidad de los funcionarios públicos, por los delitos cometidos por medio de la prensa y por la afectación de derechos fundamentales, siempre serán públicos. La publicidad de los juicios está

también referida a la facultad de los medios de comunicación de poder informar sobre el desenvolvimiento de un juzgamiento y hacer efectivo el derecho de control ciudadano; pero la información propalada debe ser objetiva e imparcial, el medio de comunicación no debe convertirse en medio de presión o de sensacionalismo. Sin embargo, la difusión por estos medios no deja de presentar algunos problemas, por lo que algunas legislaciones han previsto restricciones para la prensa cuando se colisiona con otros intereses que deben ser igualmente protegidos. Así el art. 357° ha previsto esta restricción autorizando al Juez para que mediante auto especialmente motivado pueda disponer que el acto oral se realice total o parcialmente en privado en los casos expresamente previstos en dicha norma.

El Principio de Oralidad. Está plenamente garantizado por el Código adjetivo, en las normas antes citadas. Quienes intervienen en la audiencia deben expresar a viva voz sus pensamientos. Todo lo que se pida, pregunte, argumente, ordene, permita, resuelva, será concretado oralmente, pero lo más importante de las intervenciones será documentado en el acta de audiencia aplicándose un criterio selectivo. La Oralidad es una característica inherente al Juicio Oral e “impone que los actos jurídicos procesales constitutivos del inicio, desarrollo y finalización del juicio se realicen utilizando como medio de comunicación la palabra proferida oralmente; esto es, el medio de comunicación durante el juzgamiento viene a ser por excelencia, la expresión oral, el debate contradictorio durante las sesiones de la audiencia es protagonizado mediante la palabra hablada”. La necesidad de la Oralidad de la audiencia es indiscutible, en tanto se requiere el debate entre los intervinientes, por ello está íntimamente ligado al llamado principio de inmediación. La

Oralidad determina una directa interrelación humana y permite un mayor conocimiento recíproco y personal entre quienes intervienen en el juicio oral. SCHMIDT ha señalado con acierto que la aplicación de estos principios, “es la única forma por medio de la cual se puede obtener una sentencia justa (...) que el debate oral como procedimiento principal, permita que la totalidad de los miembros del tribunal cognitivo puedan obtener una comprensión inmediata de todas las declaraciones y demás medios de prueba”. La oralización de los medios probatorios es el corolario del Principio de Oralidad.

El Principio de Identidad Personal. Según este principio, ni el acusado, ni el juzgador pueden ser reemplazados por otra persona durante el juzgamiento. El acusado y el juzgador deben concurrir personalmente a la audiencia desde el inicio hasta la conclusión. El juzgador viendo, oyendo, preguntando, contrastando, analizando la actitud y el comportamiento del acusado, agraviado, testigo y perito, podrá adquirir un conocimiento integral sobre el caso, este conocimiento directo e integral no sería posible si durante el juicio oral se cambiara al juzgador, pues el reemplazante no tendrá idea sobre la parte ya realizada y su conocimiento será fragmentario e incompleto. Por eso, los integrantes de la Sala Penal deben ser los mismos desde el inicio hasta el final del juicio oral.

Principio de Unidad y Concentración. La audiencia tiene carácter unitario. Si bien puede realizarse en diferentes sesiones, éstas son partes de una sola unidad. Esto debido a la necesidad de continuidad y concentración de la misma; la audiencia debe realizarse en el tiempo estrictamente necesario, las sesiones de audiencia no deben ser arbitrariamente diminutas ni indebidamente prolongadas. Así una sesión que termina es una suspensión, no una

interrupción del juicio. La razón de este principio está en que el juzgador oyendo y viendo todo lo que ocurre en la audiencia, va reteniendo en su memoria, pero cuanto más larga sea la audiencia se va diluyendo dicho recuerdo y podría expedir un fallo no justo. El Principio de Concentración está referido, primero, a que en la etapa de juicio oral serán materia de juzgamiento sólo los delitos objeto de la acusación fiscal. Todos los debates estarán orientados a establecer si el acusado es culpable de esos hechos. Si en el curso de los debates resultasen los indicios de la comisión de otro delito, éste no podrá ser juzgado en dicha audiencia. En segundo lugar, el Principio de Concentración requiere que, entre la recepción de la prueba, el debate y la sentencia exista la “mayor aproximación posible”. Este principio de concentración está destinado a evitar que, en la realización de las sesiones de audiencia de un determinado proceso, se distraiga el accionar del Tribunal con los debates de otro. Es decir, que la suspensión de la audiencia exige que cuando los Jueces retomen sus actividades, continúen con el conocimiento del mismo proceso, a fin de evitar una desconcentración de los hechos que se exponen.

2.3. **DEFINICIONES CONCEPTUALES.**

Código Procesal Penal. Cuerpo de leyes, cuyas normas se encuentran dispuestas de modo sistemático, que contiene principios, fundamentos y procedimientos de los pasos a seguir para el desarrollo del proceso penal desde la fase de investigación hasta a la emisión del fallo.

Impartición de Justicia. Actividad ejercida de modo obligatorio y exclusivo del Poder Judicial, que es un Poder del Estado debidamente organizado, e independiente, conformado por los jueces, de distintos niveles, quienes se encargan de la resolución de

conflictos, con equidad, igualdad y respeto de las garantías y otros derechos de rango constitucional.

Juez Penal. Miembro del Poder Judicial, cuya función es la de impartir justicia, es decir con función jurisdiccional, tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar en el ámbito penal; con independencia y autonomía, solo bajo el imperio de la Constitución y la Ley.

Personal Asistencial. Denominada así al personal, que sin tener la potestad de sentenciar o juzgar, contribuyen con la impartición de justicia, brindando asistencia al juez, en la tramitación de las causas, tanto en la gestión propia de expediente como en la de las audiencias a desarrollarse, sin obviar el sistema de comunicación o notificación a los sujetos procesales.

Proceso Penal. Tiene por objeto la investigación de un delito, el descubrimiento de quien lo cometió y el camino a seguir para la imposición de una sentencia, que resuelva la situación jurídica; el proceso contiene una serie de garantías de rango constitucional que deben ser observadas.

2.4. SISTEMA DE HIPÓTESIS

Hipótesis Principal.

La vigencia del Código Procesal Penal no contribuye en la mejora de la impartición de justicia con celeridad, Huánuco - 2016

Sub Hipótesis

Sh1. La capacitación de los jueces penales no es adecuada para la contribución de impartición de justicia con celeridad

Sh2. El personal asistencial del módulo del Código Procesal no contribuye adecuadamente en la impartición de justicia con celeridad

Sh3. Existen fortalezas y debilidades en la vigencia del Código Procesal Penal que se relacione con la impartición de justicia con celeridad.

2.5. VARIABLES.

Variable Independiente (Vx). Vigencia del Código Procesal Penal

Variable Dependiente (Vy). Mejora de la impartición de justicia con celeridad

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES.

| Variables | Dimensiones | Indicadores |
|--|---------------------------------|--|
| Vx. Vigencia del Código Procesal Penal | Fines | Modernizar la impartición de justicia Rapidez Descongestión |
| | Principios | Celeridad Concentración Economía Impulso de oficio Oralidad Igualdad de armas |
| Vy. Mejora en la impartición de justicia con celeridad | Capacitación de Jueces Penales | Especialización Conocimientos Experiencia |
| | Calidad de personal asistencial | Tramitación de procesos Programación de audiencias Notificaciones procesales |
| | Fortalezas | Informatización Digitalización Oralidad Formas especiales de conclusión del proceso |
| | Debilidades | Órganos jurisdiccionales Carga procesal |

CAPÍTULO III

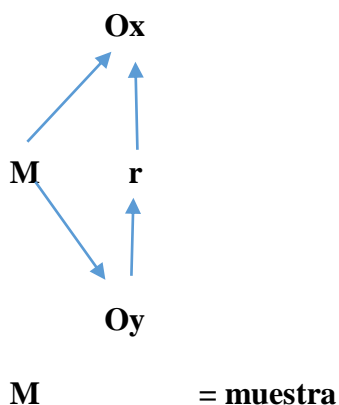
MARCO METODOLÓGICO

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

3.1.1. Enfoque. La presente investigación fue cuantitativa, pues se ha utilizado la recolección de datos para medir las variables y analizarlas a través de la estadística, lo que nos permitió comprobar las hipótesis, se ha seguido una secuencia ordenada de pasos, desde la formulación del problema tanto general como específicos, así como los objetivos y las hipótesis que serán contrastadas, arribando a las conclusiones (HERNÁNDEZ SAMPIERI, 2014, p. 36).

3.1.2. Nivel. La presente investigación fue descriptiva - explicativa porque se han descrito y explicado todas las características del fenómeno observado en un determinado lugar y momento.

3.1.3. Diseño. Fue no experimental, porque la investigadora no ha manipulado las variables, solo las ha observado tal como se producen en la realidad y se ha ofrecido una explicación, la misma que se ha ejecutado de acuerdo al siguiente diseño de investigación.



Ox, Oy = observación de variables

r = relación

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA.

3.2.1. Población. La población para el desarrollo de la presente investigación, fue finita y estuvo compuesta por todos los magistrados (jueces y fiscales) especializados en lo penal, que trabajan en el Modulo del Código Procesal Penal, además de los abogados y litigantes inmersos en el nuevo proceso penal, para tal efecto se ha obtenido como muestra lo siguiente.

3.2.2. Muestra. La obtención fue no probabilístico simple al azar, para tal efecto se ha obtenido.

Jueces : 10

Fiscales : 10

Abogados : 10

Litigantes : 10

Total: 40 personas que conforman la muestra.

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS.

Análisis documental. Se han analizado y revisado la distinta bibliografía: textos, manuales, revistas, tanto físicos como de internet de distintos autores nacionales y extranjeros. Para tal efecto como instrumento se ha utilizado las fichas de resumen, de texto y bibliográficas.

Encuesta. La muestra fue encuestada a efectos de obtener datos fidedignos respecto al tema investigado, para tal efecto sea ha utilizado como instrumentos el cuestionario,

anónimo con preguntas debidamente elaboradas, politómicas cerradas, el mismo que ha sido validado por expertos.

3.4. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. Son los procedimientos que nos permitieron el procesamiento de los datos, a través de la información de las fuentes seleccionadas y con las cuales se realizó la investigación, por lo que nos ha permitido utilizar las técnicas de la **Estadística descriptiva y Estadística inferencial**, para contrastar la hipótesis propuesta al inicio del trabajo

- **Estadística descriptiva**
- **Estadística inferencial**

3.5. PRESENTACIÓN DE DATOS.

- **Tablas:** Las tablas que se han de presentar de acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta.
- **Gráficos:** Cada tabla fue representada por un gráfico estadístico ya sea en barras o columnas, representada por la cantidad y porcentaje.
- **Análisis por cada uno:** Cada uno de los datos fue analizado respecto a la respuesta dada por los encuestados y el porcentaje que representan, para determinar la incidencia.
- **Conclusión preliminar por cada uno:** Del mismo modo se presentaron las conclusiones a las que arriba la investigadora.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

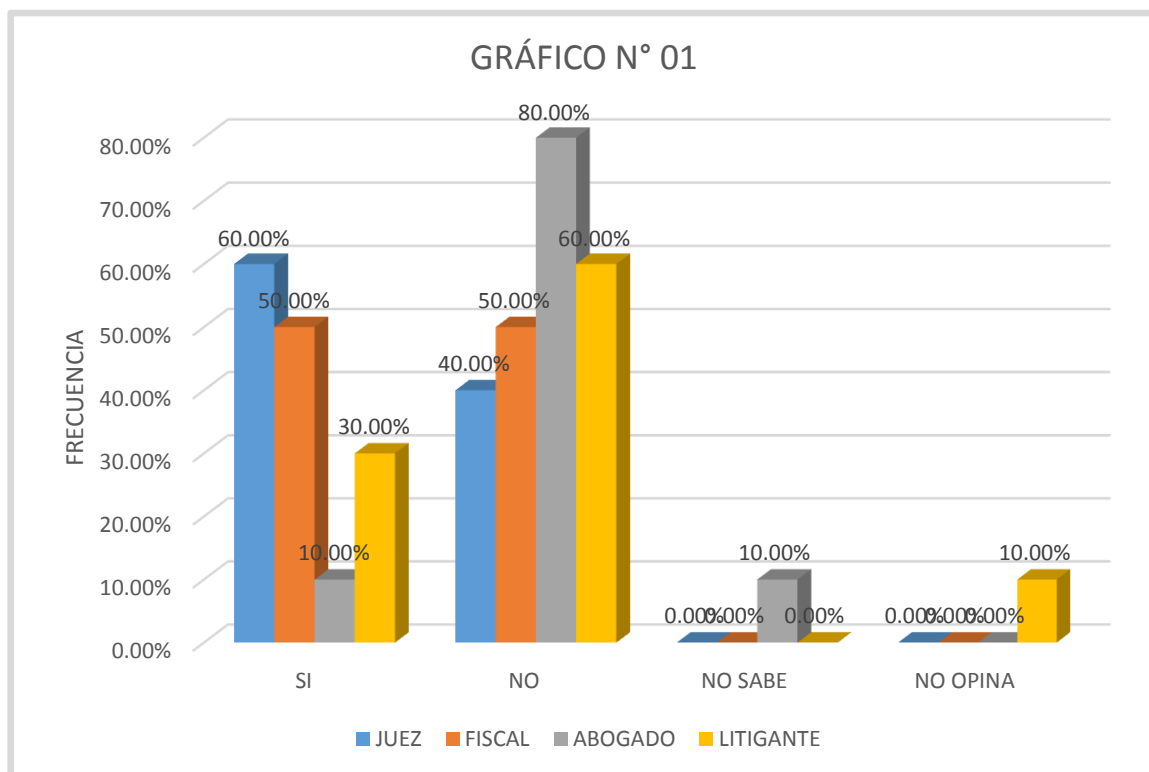
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

Tabla N° 01

¿Considera que el Nuevo Código Procesal Penal vigente desde el 01 de junio del 2012,
ha mejorado el sistema de impartición de Justicia?

| PREGUNTA N° 01 | FRECUENCIA | | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------|----|-------|---------|-------|----------|-------|
| | SI | | NO | | NO SABE | | NO OPINA | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Juez | 6 | 60.0% | 4 | 40.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Fiscal | 5 | 50.0% | 5 | 50.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Abogados | 1 | 10.0% | 8 | 80.0% | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% |
| Litigantes | 3 | 30.0% | 6 | 60.0% | 0 | 0.0% | 1 | 10.0% |

Fuente: muestra encuestada



Análisis de resultados

Sobre la primera pregunta, los resultados no han sido homogéneos pues para los magistrados, el 60.0% de los Jueces y el 50.0% de los fiscales, consideran que el Nuevo Código Procesal Penal vigente en Huánuco desde el 01 de Junio del 2012, ha mejorado el sistema de impartición de justicia; es lógico porque son tales magistrados quienes pertenecen al sistema de administración de justicia, cada uno con el rol que le asigna la ley; no obstante una cifra muy importante que corresponde al 40.0% de Jueces y 50.0% de Fiscales consideran que esta norma adjetiva no ha contribuido en la mejora.

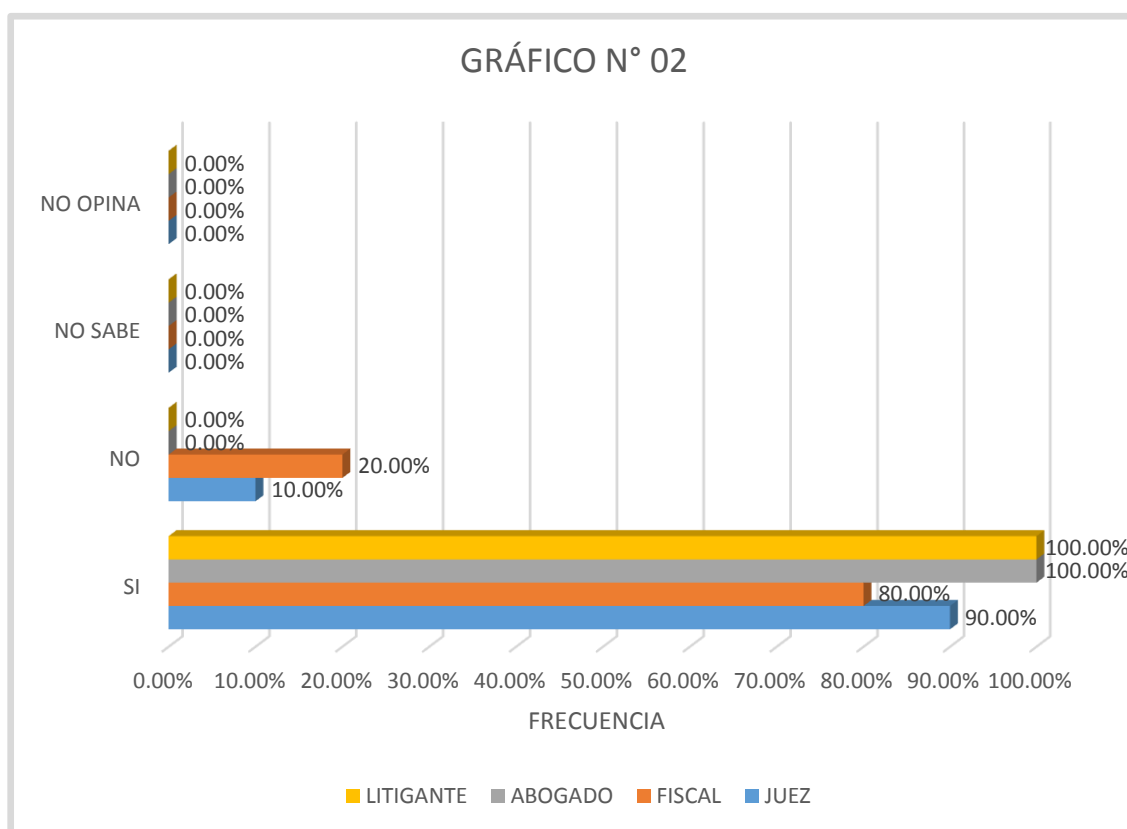
Por su parte, quienes acuden a tales dependencias, el 80.0% de los Abogados y el 60.0% de los Litigantes, consideran que esta nueva norma procesal penal no ha contribuido en la mejora de la impartición de justicia.

Tabla N° 02

¿Considera el Principio de Celeridad Procesal elemental dentro del Proceso Penal?

| PREGUNTA N° 02 | FRECUENCIA | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------|----|-------|---------|------|----------|------|
| | SI | | NO | | NO SABE | | NO OPINA | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Juez | 9 | 90.0% | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Fiscal | 8 | 80.0% | 2 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Abogados | 10 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Litigantes | 10 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

Fuente: muestra encuestada



Análisis de resultados

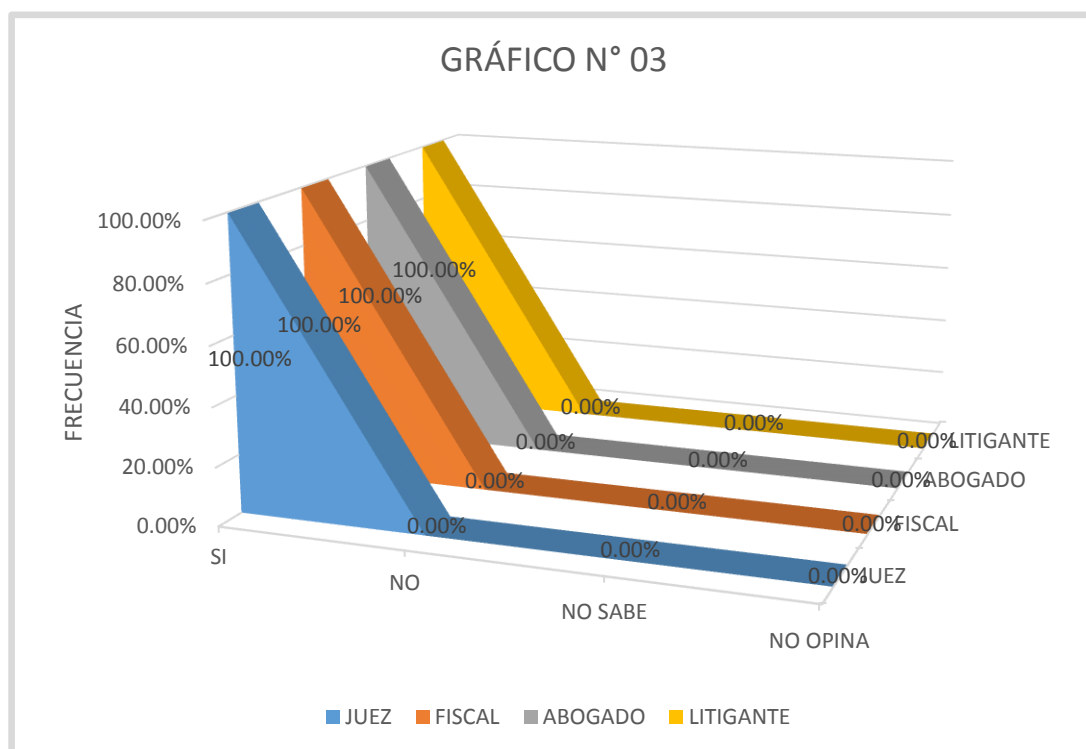
Respecto a la segunda pregunta; de modo correcto el 100.0% de los Abogados y el 100.0% de los litigantes; han considerado que el principio de celeridad procesal es elemental dentro del Proceso Penal, en el mismo sentido aunque en porcentajes menores, que corresponde al 90.0% de los Jueces y el 80.0% de Fiscales consideran que este principio es elemental, estos porcentajes menores, se deben a que estos magistrados son los encargados, de acuerdo a cada función, de la impartición de justicia, teniendo a su cargo la investigación y juzgamiento, por ende, son estos funcionarios quienes tienen que velar por la efectividad del cumplimiento de este principio procesal.

Tabla N° 03

¿Considera que la capacitación de los jueces es adecuada para la aplicación del Código
Procesal Penal?

| PREGUNTA N° 03 | FRECUENCIA | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------|----|------|---------|------|----------|------|
| | SI | | NO | | NO SABE | | NO OPINA | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Juez | 10 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Fiscal | 10 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Abogados | 10 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Litigantes | 10 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

Fuente: muestra encuestada



Análisis de Resultados

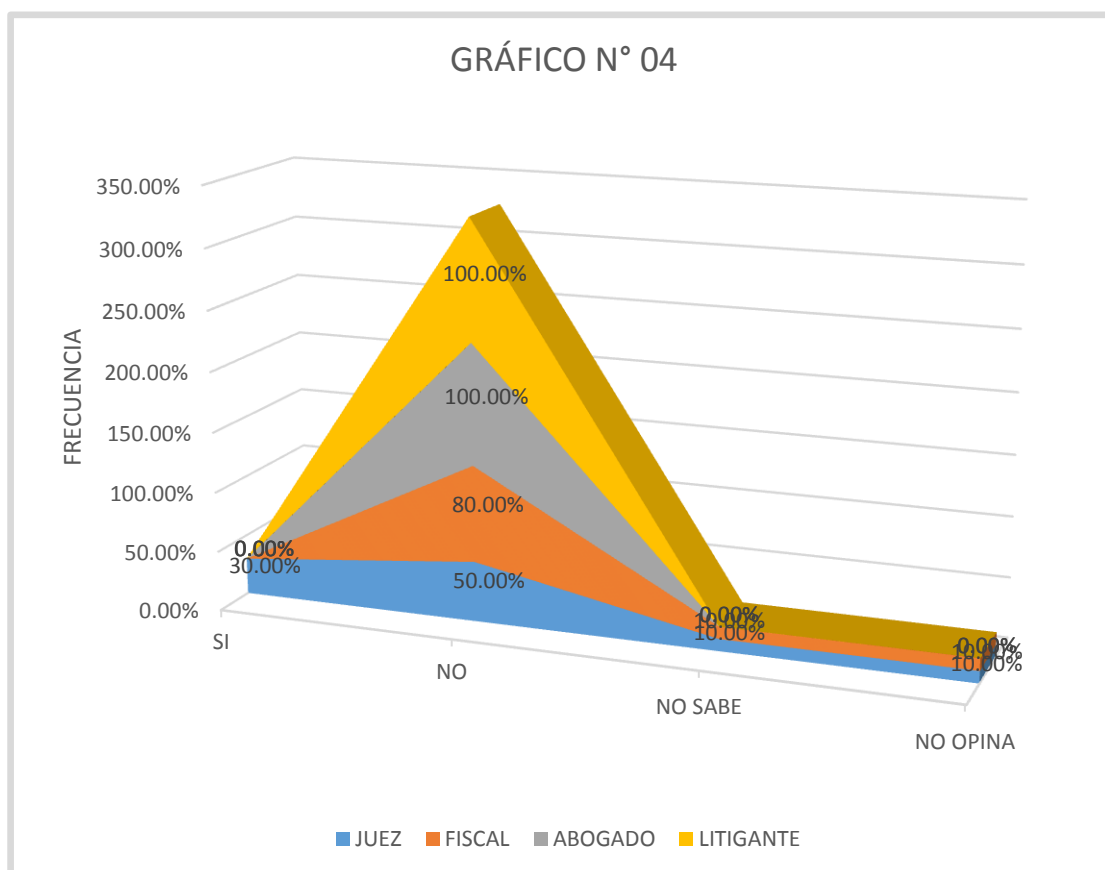
A la tercera pregunta, el 100.0% de la muestra que corresponde a Jueces, Fiscales, Abogados y Litigantes, de modo correcto coinciden al considerar que para una adecuada aplicación del Código Procesal Penal, vigente desde el 2012, es necesario que los jueces estén bien capacitados, lo que resulta cierto, pues el Juez ya sea de Investigación Preparatoria, Juzgamiento y de Apelación, es el funcionario quien imparte justicia y por ende quien decide o resuelve, por ende esta función tan delicada requiere que los magistrados se encuentren debidamente preparados o capacitados en Derecho Procesal Penal.

Tabla N° 04

¿Considera que el personal asistencial del Módulo del Código Procesal Penal es el adecuado para la impartición de justicia con celeridad?

| PREGUNTA N° 04 | FRECUENCIA | | | | | | | |
|-------------------|------------|-------|----|--------|---------|-------|----------|-------|
| | SI | | NO | | NO SABE | | NO OPINA | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Juez | 3 | 30.0% | 5 | 50.0% | 1 | 10.0% | 1 | 10.0% |
| Fiscal | 0 | 0.0% | 8 | 80.0% | 1 | 10.0% | 1 | 10.0% |
| Abogados | 0 | 0.0% | 10 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Litigantes | 0 | 0.0% | 10 | 100.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

Fuente: muestra encuestada



Análisis de resultados

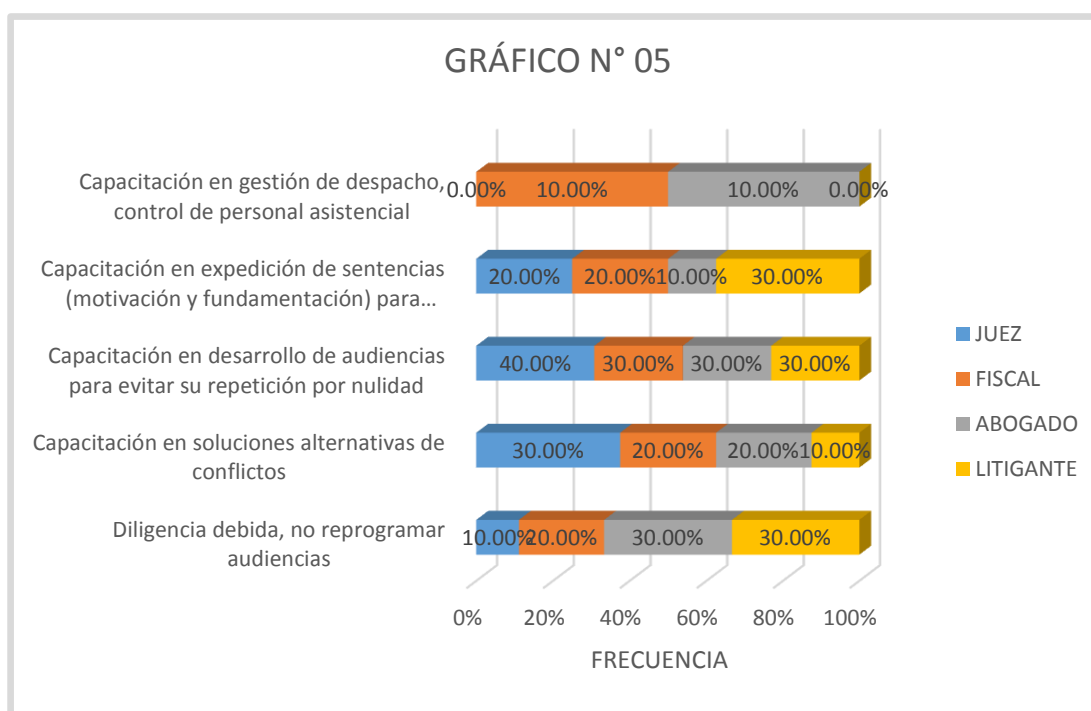
La capacitación del juez per se, no solo bastará para que el Código Procesal Penal del 2004, sea una herramienta procesal adecuada: eficaz y efectiva, en la resolución de procesos penales, pues una parte fundamental también la constituye el personal asistencial (que corresponde a los especialistas de causas y audiencias, entre otros), pues este grupo de personas que laboran en el Poder Judicial, que realizan los trámites cuando los procesos se encuentra ya judicializados, no obstante de acuerdo a lo manifestado por la muestra: para el 100.0% de Abogados y Litigantes; consideran que este personal no es adecuado; en el mismo sentido pero en porcentajes menores lo considera el 50.0% de Jueces y el 80.0% de Fiscales.

Tabla N° 05

¿Qué elementos se deben tener en cuenta para la capacitación de los jueces?

| PREGUNTA N° 05 | FRECUENCIA | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|---|-------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | Diligencia debida, no reprogramar audiencias | | Capacitación en soluciones alternativas de conflictos | | Capacitación en desarrollo de audiencias para evitar su repetición por nulidad | | Capacitación en expedición de sentencias (motivación y fundamentación) para evitar nuevos juicios orales | | Capacitación en gestión de despacho, control de personal asistencial | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Juez | 1 | 10.0% | 3 | 30.0% | 4 | 40.0% | 2 | 20.0% | 0 | 0.0% |
| Fiscal | 2 | 20.0% | 2 | 20.0% | 3 | 30.0% | 2 | 20.0% | 1 | 10.0% |
| Abogados | 3 | 30.0% | 2 | 20.0% | 3 | 30.0% | 1 | 10.0% | 1 | 10.0% |
| Litigantes | 3 | 30.0% | 1 | 10.0% | 3 | 30.0% | 3 | 30.0% | 0 | 0.0% |

Fuente: muestra encuestada



Análisis de Resultados

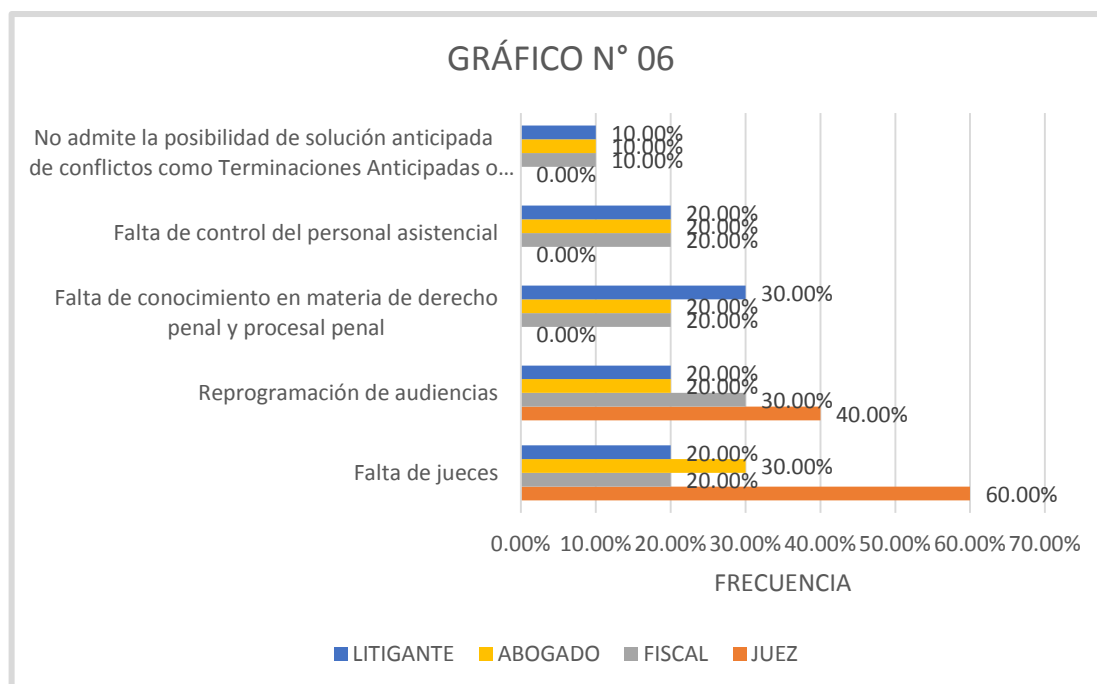
A la quinta pregunta, los resultados han sido dispersos, pero todos coinciden en pronunciarse a favor de la capacitación de los jueces, como necesidad fundamental para que el Código Procesal Penal funcione, ello porque será el Juez tanto de Investigación Preparatoria como de Juzgamiento (Unipersonal y colegiado) y de Apelaciones, quienes van a resolver el caso según la etapa que corresponde, siendo los hitos más altos los siguientes: para el 40.0% de los jueces consideran que entre otros, se debe incidir en la capacitación en desarrollo de audiencias, para evitar nulidades, y que estas debe ser repetidas nuevamente; en el mismo sentido se ha pronunciado el 30.0% de Fiscales; por su parte para los abogados, además de ello se debe incidir en diligencia debida para no reprogramar las audiencias de acuerdo al 30.0% y para los Litigantes el 30.0% en diligencia debida y el 30.0% en la necesidad de fundamentar y argumentar las sentencias para evitar la nulidad de los juicios orales.

Tabla N° 06

¿Qué, problemas considera Ud., son los que afectan el Principio de Celeridad en la impartición de justicia, respecto a los jueces durante el proceso penal?

| PREGUNTA N° 06 | FRECUENCIA | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------|------------------------------|-------|--|-------|---|-------|--|-------|
| | Falta de jueces | | Reprogramación de audiencias | | Falta de conocimiento en materia de derecho penal y procesal penal | | Falta de control del personal asistencial | | No admite la posibilidad de solución anticipada de conflictos como Terminaciones Anticipadas o Conclusiones Anticipadas. | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Juez | 6 | 60.0% | 4 | 40.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Fiscal | 2 | 20.0% | 3 | 30.0% | 2 | 20.0% | 2 | 20.0% | 1 | 10.0% |
| Abogados | 3 | 30.0% | 2 | 20.0% | 2 | 20.0% | 2 | 20.0% | 1 | 10.0% |
| Litigantes | 2 | 20.0% | 2 | 20.0% | 3 | 30.0% | 2 | 20.0% | 1 | 10.0% |

Fuente: muestra encuestada



Análisis de resultados

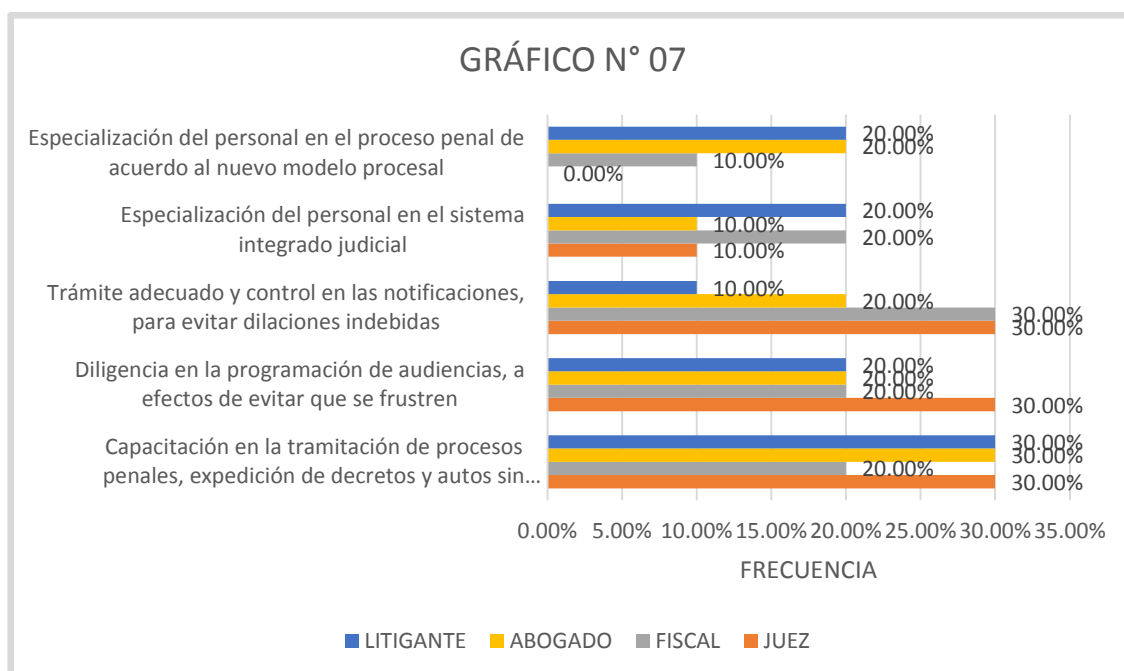
A la sexta pregunta, se aprecia que las respuestas han sido dispersas respecto a las cinco alternativas, por ende todas estas alternativas, constituyen problemas que afectan el Principio de Celeridad en la impartición de justicia por parte de los jueces penales durante el proceso penal, pero una de las muestras presenta cierta variación en los porcentajes, siendo los mayores: para el 30.0% de los Jueces considera que es la falta de más jueces; para 30.0% de Fiscales es la reprogramación de audiencias; para el 30.0% de abogados es la falta de más jueces y para el 30.0% es la falta de conocimiento de los jueces en materia penal y procesal penal.

Tabla N° 07

¿Para Ud. que elementos se debe tener en cuenta para que el proceso penal respete el principio de celeridad, respecto al personal asistencial?

| PREGUNTA N° 07 | FRECUENCIA | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|--|-------|--|-------|---|-------|--|-------|
| | Capacitación en la tramitación de procesos penales, expedición de decretos y autos sin retardo | | Diligencia en la programación de audiencias, a efectos de evitar que se frustren | | Trámite adecuado y control en las notificaciones, para evitar dilaciones indebidas | | Especialización del personal en el sistema integrado judicial | | Especialización del personal en el proceso penal de acuerdo al nuevo modelo procesal | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Juez | 3 | 30.0% | 3 | 30.0% | 3 | 30.0% | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% |
| Fiscal | 2 | 20.0% | 2 | 20.0% | 3 | 30.0% | 2 | 20.0% | 1 | 10.0% |
| Abogados | 3 | 30.0% | 2 | 20.0% | 2 | 20.0% | 1 | 10.0% | 2 | 20.0% |
| Litigantes | 3 | 30.0% | 2 | 20.0% | 1 | 10.0% | 2 | 20.0% | 2 | 20.0% |

Fuente: muestra encuestada



Análisis de resultados

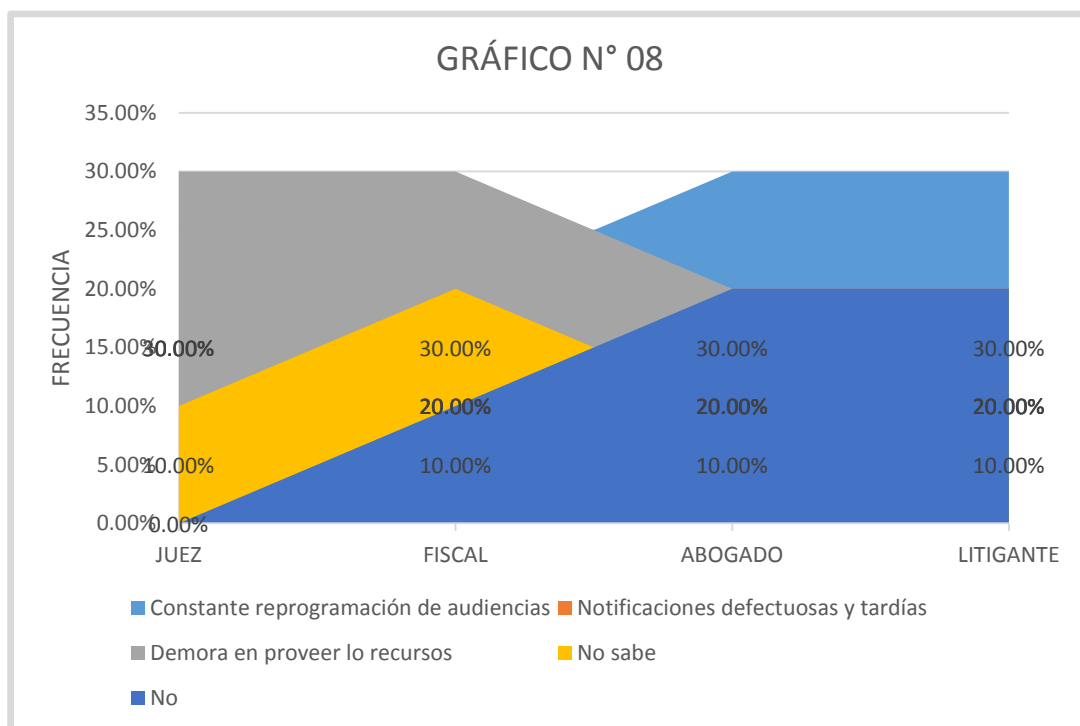
Respecto a la séptima pregunta; se aprecia que los resultados son muy dispersos de acuerdo a cada muestra, pero de ella se colige que deben tenerse en cuenta ciertos elementos a efectos que el Principio de Celeridad se respete; entre ellos: la capacitación en tramitación de procesos penales; diligencia en la programación de audiencias y su adecuada notificación fueron los índices mayores considerados por el 30.0% de los jueces; para los Fiscales que consideran que todos estos elementos deben tenerse en cuenta para el cargo desempeñado como personal asistencial, el índice mayor de 30.0% se refiere respecto al trámite adecuado y control en notificaciones; por su parte para los abogados y litigantes el 30.0% fueron los índices más altos en capacitación en la tramitación de los procesos penales.

Tabla N° 08

¿Qué, problemas considera Ud. que afectan el Principio de Celeridad Procesal en la
impartición de justicia, respecto al personal asistencial?

| PREGUNTA N° 08 | FRECUENCIA | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------|--------------------------------------|-------|-------------------------------|-------|---------|-------|----------|------|
| | Constante reprogramación de audiencias | | Notificaciones defectuosas y tardías | | Demora en proveer lo recursos | | No sabe | | No opina | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Juez | 3 | 30.0% | 3 | 30.0% | 3 | 30.0% | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% |
| Fiscal | 5 | 50.0% | 4 | 40.0% | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Abogados | 4 | 40.0% | 4 | 40.0% | 2 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Litigantes | 5 | 50.0% | 4 | 40.0% | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

Fuente: muestra encuestada



Análisis de resultados

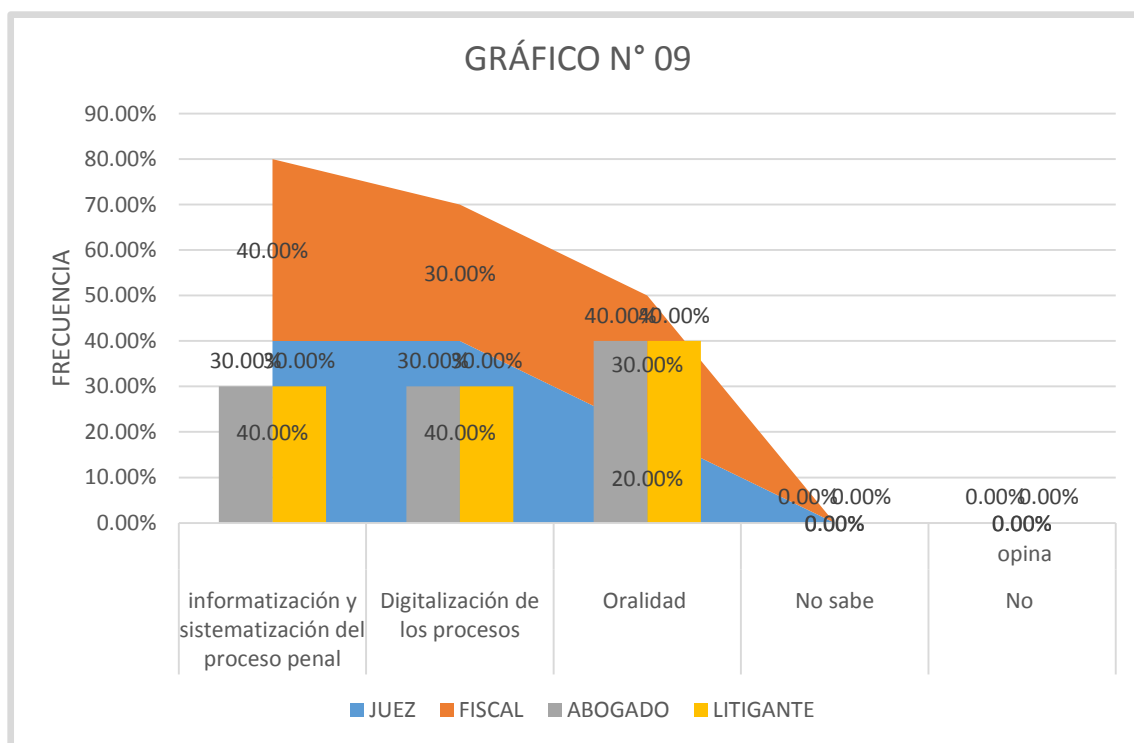
La muestra ha considerado que existen problemas que afectan el Principio de Celeridad Procesal, que atañe al personal asistencial; los porcentajes han sido dispersos, y son los siguientes; para el 30.0% de jueces consideran que son: la constante reprogramación de audiencias; notificaciones defectuosas y tardías y la demora en proveer los recursos; para el 50.0% de Fiscales es la constante reprogramación de audiencia y para el 40.0% son las notificaciones defectuosas o tardías; en el mismo sentido el 40.0% de Abogados, y para el 50.0% y 40.0% de los Litigantes, respectivamente.

Tabla N° 09

¿Qué fortalezas encuentra Ud. en el trámite del Nuevo Proceso Penal?

| PREGUNTA N° 06 | FRECUENCIA | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|--------------------------------|-------|----------|-------|---------|------|----------|------|
| | Informatización y sistematización del proceso penal | | Digitalización de los procesos | | Oralidad | | No sabe | | No opina | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Juez | 4 | 40.0% | 4 | 40.0% | 2 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Fiscal | 4 | 40.0% | 3 | 30.0% | 3 | 30.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Abogados | 3 | 30.0% | 3 | 30.0% | 4 | 40.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Litigantes | 3 | 30.0% | 3 | 30.0% | 4 | 40.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

Fuente: muestra encuestada



Análisis de resultados

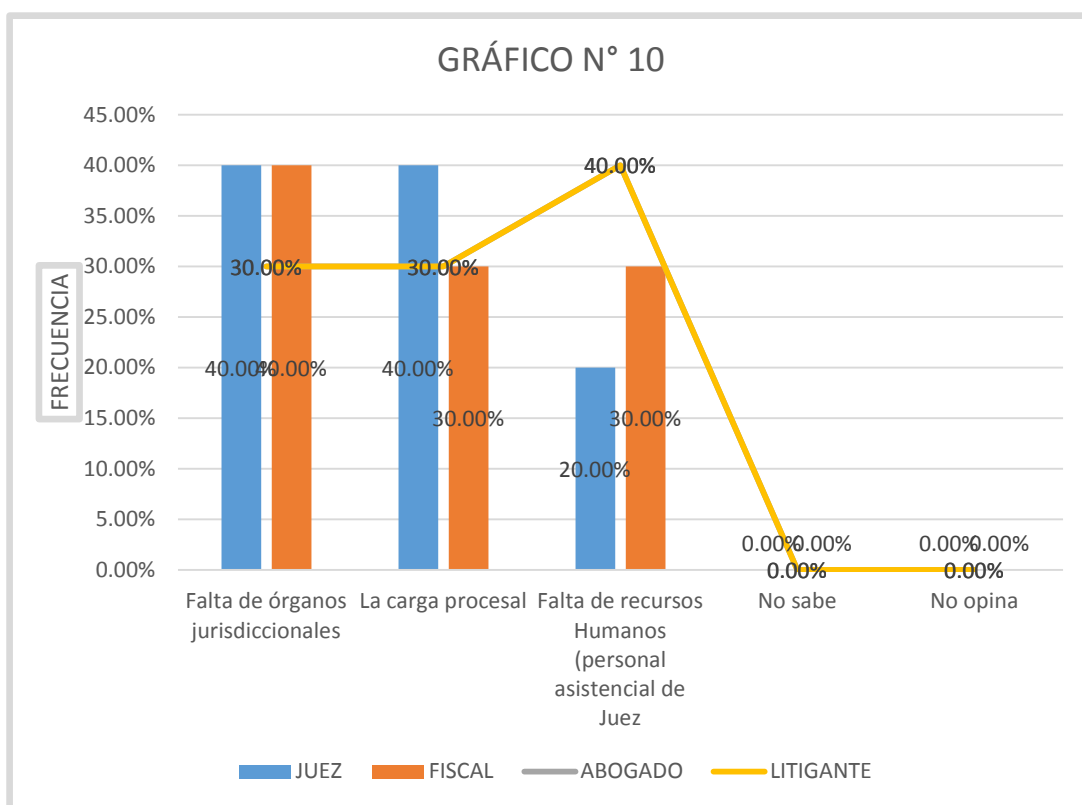
Respecto a la novena pregunta, la muestra coincide en considerar que el Nuevo Código Procesal Penal tiene una serie de fortalezas; precisan que en efecto, esta nueva norma penal adjetiva tiene muchas bondades, lo que es correcto, pero que obviamente requiere que quienes lo aplican, lo hagan de modo correcto, entre las fortalezas más saltante en la informatización y sistematización del proceso penal, así se pronunció el 40.0% de jueces y fiscales y 30.0% de abogados y litigantes; la digitalización de los procesos de acuerdo al 40.0% de jueces y 30.0% de fiscales, abogados y litigantes; y la oralidad el 40.0% de abogados y litigantes y el 30.0% de fiscales y el 20.0% de jueces.

Tabla N° 10

¿Qué, debilidades encuentra Ud. en el trámite del Nuevo Proceso Penal?

| PREGUNTA N° 09 | FRECUENCIA | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------|-------------------|-------|---|-------|---------|------|----------|------|
| | Falta de órganos jurisdiccionales | | La carga procesal | | Falta de recursos Humanos (personal asistencial de Juez | | No sabe | | No opina | |
| | N | % | N | % | N | % | N | % | N | % |
| Juez | 5 | 50.0% | 4 | 40.0% | 1 | 10.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Fiscal | 3 | 30.0% | 4 | 40.0% | 3 | 30.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Abogados | 7 | 70.0% | 3 | 30.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| Litigantes | 8 | 80.0% | 2 | 20.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |

Fuente: muestra encuestada



Análisis de resultados

Entre las debilidades que presenta el trámite del nuevo Código Procesal Penal, la muestra ha considerado tres debilidades, pero los porcentajes de cada una ella es distinto, así los jueces consideraron en el 50.0%, que es la falta de órganos jurisdiccionales; en ese sentido se pronunció el 30.0% de fiscales, el 70.0% de abogados y el 80.0% de litigantes.

Para el 40.0% de los jueces lo es la carga procesal, en el mismo sentido se pronunció el 40.0% de Fiscales, 30.0% de abogados y el 20.0% de litigantes;

Por su parte el 10.0% de jueces consideró que es la falta de recursos humanos (personal asistencial del Juez); en el mismo sentido se pronunció el 30.0% de fiscales.

4.2. Contrastación de Hipótesis General.

Al inicio del presente trabajo de investigación, nos formulamos la siguiente hipótesis general: La vigencia del Código Procesal Penal no contribuye en la mejora de la impartición de justicia con celeridad, Huánuco – 2016.

A la luz de los resultados obtenidos se ha logrado comprobar esta hipótesis general; pues si bien es verdad, de acuerdo a lo considerado por la muestra, el Principio de Celeridad es elemento dentro del Proceso Penal, sin embargo de acuerdo a lo considerado por la misma muestra conformada por el 50.0% de los Jueces y el 40.0% de los Fiscales, desde que entró en vigencia el Código Procesal Penal en Huánuco, (01 de Junio del 2012), ha mejorado el sistema de impartición de justicia, ello se debe a que los magistrados encuestados están inmersos y despliegan sus funciones aplicando esta nueva norma penal adjetiva; pero tal consideración no es compartida por el 80.0% de Abogados y el 60.0% de Litigantes, quienes desde la defensa, también tienen que utilizar esta nueva herramienta procesal penal, pero son quienes padecen las continuas reprogramaciones de audiencias, los problemas en las notificaciones y señalamiento de diligencias, las nulidades de las resoluciones y diligencias, es decir para quienes, el proceso penal no respeta el principio de celeridad procesal, por ende no consideran que existe mejora en la impartición de justicia.

En este mismo orden de ideas, si bien la muestra ha considerado que existen fortalezas entre las que se encuentran la informatización y sistematización del proceso penal, la digitalización de los procesos y la oralidad, lo que en efecto es correcto como se ha pronunciado la muestra (Ver Tabla N° 09); sin embargo la informatización y la tecnología no es suficiente para mejorar la impartición de justicia, así como tampoco lo es la oralidad; pues también se observan una serie de debilidades que son un obstáculo para que se efectivice el principio de celeridad, como son: la falta de órganos

jurisdiccionales, la carga procesal, la falta de recursos humanos (personal asistencial de Juez), (Ver Tabla N° 10).

Sin embargo, también es necesario advertir que las bondades que se advierten en el Código Procesal Penal, como una adecuada y moderna herramienta procesal, para investigar, procesar y juzgar a los sujetos que cometen delito; requiere de operadores jurídicos que lo apliquen de acuerdo a los principios que legitiman en Proceso Penal plasmados desde la Constitución Política del Estado y desde la norma procesal penal, lo que se logrará con jueces altamente capacitados (Ver Tabla N° 03); se requiere que además el personal asistencial, especialista de causas, audiencias, auxiliares, notificadores, entre otro; sea el adecuado (Ver Tabla 04); lo que no ocurre pues existe una constante reprogramación de audiencias, las notificaciones defectuosas y tardías la demora en proveer recursos afectan el Principio de celeridad Procesal, (Ver Tabla N° 08)

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1. Solución del problema.

Al inicio de la presente investigación nos formulamos la siguiente interrogante: ¿En qué medida la vigencia del Código Procesal Penal actual influye en la mejora de la impartición de justicia con celeridad, Huánuco 2016?

Una vez obtenidos los resultados podemos afirmar que si bien desde el 01 de Junio del 2012, fecha en que entró en vigencia en Código Procesal Penal, D. Legislativo N° 957; en el Distrito Judicial de Huánuco, se instaura un proceso penal acusatorio, garantista y de tendencia adversarial; con un nuevo cambio de paradigma: la oralidad, la celeridad, independencia de roles; luego de cinco años de su vigencia, hemos podido comprobar que si bien la norma penal adjetiva presenta una serie de bondades, en la realidad ello no se cumple, pero no porque la norma jurídica no sea aplicable, sino por los operadores jurídicos; (Jueces y Personal Asistencial), se ha demostrado que existe falta de más órganos jurisdiccionales, (jueces y personal asistencial), pero ello no basta pues se requiere que éstos se encuentren debidamente capacitados tanto en Derecho Penal, como en el Proceso Penal, pero además en gestión de despacho a efectos que las audiencias no se reprogramen de modo continuo, que no existan problemas en las notificaciones, pero además que los decretos y autos se expidan dentro del término de ley y que tanto las audiencias no sean declaradas nulas.

5.2. Propuesta.

Nuestra propuesta es que, afectos que se imparta justicia con celeridad, dentro del marco del Nuevo Código Procesal Penal, es de vital importancia que los jueces que administran justicia aplicando esta herramienta adjetiva, se encuentren debidamente capacitados, no solo en Derecho Penal, sino el Derecho Procesal Penal, aplicando de modo correcto el código penal adjetivo; lo que se verificará no solo en cantidad de jueces, sino en la calidad de ellos mismos; además se requiere que el personal asistencial (especialistas de audiencias, de causas, notificadores, auxiliares, etc.) sean profesionales altamente calificados que contribuyen con la administración de justicia con celeridad, lo que se verificará en la adecuada y oportuna expedición de decretos y autos, en la correcta y oportuna notificación de resoluciones y de señalamiento de audiencias, para evitar reprogramaciones y nuevas notificaciones.

5.3. Propuesta de nuevas hipótesis.

La impartición de justicia, dentro del marco del Nuevo Código Procesal Penal, será respetuosa del Principio de Celeridad, en la medida que tanto los jueces y el personal asistencial se encuentren debidamente capacitados con el manejo adecuado del código penal adjetivo, evitando retardo en la administración de justicia y en dilaciones indebidas.

CONCLUSIONES

PRIMERA CONCLUSIÓN

Se ha logrado conocer la capacitación de los jueces penales para la contribución de impartición de justicia con celeridad, a esta conclusión se ha arribado, de acuerdo a los resultados obtenidos pues el 100.0% de la muestra considera que la capacitación de los jueces es adecuada para la aplicación del Código Procesal Penal, (Ver Tabla N° 03) lo que es correcto pues el código penal adjetivo, requiere que jueces altamente capacitados en Derecho Penal y Proceso Penal, para que se respete el principio de celeridad procesal, pues se ha logrado verificar una serie de defectos en la tramitación procesal por parte de los jueces, no reprogramación oportuna de audiencias, no existe solución alternativa de conflictos; audiencias y sentencias declaradas nulas, falta de control al personal y gestión de despacho, (Ver Tabla N° 05 y N° 06).

SEGUNDA CONCLUSIÓN

Se ha logrado establecer que la calidad del personal asistencial del módulo del Código Procesal Penal no contribuye con la impartición de justicia con celeridad, a tal conclusión se ha arribado con las respuestas obtenidas por la muestra, quienes han considerado que el personal asistencial no es el adecuado (Ver Tabla N° 04), se requiere personal calificado y

especializado en proceso penal, pues se ha verificado una serie de deficiencias: retardo en la expedición de decretos y autos, reprogramación de audiencias y diligencias por problemas en las notificaciones, falta de manejo en el sistema integrado judicial, (Ver Tabla N° 07 y 08).

TERCERA CONCLUSIÓN

Se ha logrado establecer que existen fortalezas y debilidades desde la vigencia del nuevo procesal penal, que se relaciona con la impartición de justicia con celeridad, lo que debe ser explotado por los operadores jurídicos a efectos de la optimización del sistema de impartición de justicia; entre las fortalezas tenemos: la informatización y sistematización del proceso penal; la digitalización de los procesos penales, es decir la tecnología y la informática al servicio de la justicia que ahorra tiempo en el trámite procesal y la oralidad que queda guardado en soporte magnético, que permite el ahorro de tiempo en el trámite de los procesos; y como debilidades se tienen la falta de órganos jurisdiccionales, es decir más juzgados y jueces, pero no solo cantidad, sino que debemos preocuparnos por la calidad; la carga procesal que se ha generado sobre todo porque no se cumple con los plazos, se reprograman diligencia y se repite el trabajo (se transcribe los audios en las actas); falta de recursos humanos jueces y personal asistencias, altamente calificado.

SUGERENCIAS

PRIMERA SUGERENCIA

Se sugiere que los jueces penales sean profesionales altamente calificados para la aplicación del Código Procesal Penal, tanto en Derecho Penal y Proceso Penal, para que se respete el principio de celeridad procesal.

SEGUNDA SUGERENCIA

Se sugiere que el personal asistencial del módulo del Código Procesal Penal sea altamente calificado y especializado en proceso penal, para que contribuya con la impartición de justicia con celeridad.

TERCERA SUGERENCIA

Se sugiere revalorar la fortalezas y bondades del proceso penal, que efectiviza la impartición de justicia con celeridad, y que beneficia la función de los operadores jurídicos para la optimización del sistema de impartición de justicia: la informatización y sistematización del proceso penal; digitalización de los procesos penales, es decir la tecnología y la informática al servicio de la justicia que ahorra tiempo en el trámite procesal y la oralidad que queda guardado en soporte magnético, que permite el ahorro de tiempo en el trámite de los procesos y disminuir las debilidades que se presentan en el trámite del proceso penal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACHMIDT, E. (1957). *LOS FUNDAMENTOS TEORICOS Y CONSTITUCIONALES DEL DERECHO PROCESAL PENAL*. BUENOS AIRES: BIBLIOGRAFICA.

ARBULÚ MARTÍNEZ, V. (2013). *DERECHO PROCESAL PENAL. TOMO 2*. LIMA: EDICIONES LEGALES.

BACIGALUPO, E. (2005). *EL DEBIDO PROCESO PENAL*. BUENOS AIRES: HAMMURABI.

BOVINO, A. (2005). *PRINCIPIOS POLITICOS DEL PROCEDIMIENTO PENAL*. BUENOS AIRES: EDITORES DEL PUERTO.

CHIRINOS SOTO, E. (2008). *CÓDIGO PENAL. COMENTADO, SUMILLADO Y CONCORDADO*. LIMA: GRIJLEY.

CUBAS VILLANUEVA, V. (2015). *EL NUEVO PROCESO PENAL PERUANO*. LIMA: PALESTRA.

EBERHARD, S. (1957). *LOS FUNDAMENTOS TEORICOS Y CONSTITUCIONALES DEL DERECHO PROCESAL PENAL*. BUENOS AIRES: BIBLIOGRAFICA.

FLORES POLO, P. *DICCIONNARIO JURIDICO FUNDAMENTAL*. LIMA: GRIJLEY

FRISANCHO APARICIO, M. (2014). *EL NUEVO PROCESO PENAL, TEORÍA Y PRÁCTICA*. LIMA: EDICIONES LEGALES.

GÁLVEZ VILLEGAS, T., RABANAL PALACIOS, W., & CASTRO TRIGOSO, H. (2008).

EL CÓDIGO PROCESAL PENAL. COMENTARIOS DESCRIPTIVOS, EXPLICATIVOS Y CRÍTICOS. LIMA: D'JUS.

HUERTA, A., & GUERRERO, L. (2003). *EL DEBIDO PROCESO EN LAS DECISIONES*

DE LA C.I.D.H. LIMA: ANDINA JURISTAS.

LANDA ARROYO, C. (2014). BASES CONSTITUCIONALES DEL NUEVO CÓDIGO

PROCESAL PENAL PERUANO. EN A. Y. CLAROS GRANADOS, *CÓDIGO PROCESAL PENAL COMENTADO* (PÁGS. 9-26). LIMA : EDICIONES LEGALES.

LÓPEZ BARJA DE QUIROJA, J. (2004). *TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL.*

NAVARRA: ARANZADI.

MARTÍNEZ HUAMÁN, R. (2014). EJERCICIO PRIVADO DE LA ACCIÓN PENAL EN

LA APLICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL 2004. EN A. Y. CLAROS GRANADOS, *NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL COMENTADO* (PÁGS. 1648-1673). LIMA: EDICIONES LEGALES.

MÁVILA, R. (2014). LOS PROCESOS ESPECIALES EN EL NUEVO CÓDIGO

PROCESAL PENAL. EN A. Y. CLAROS GRANADOS, *NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL. COMENTADO VOL. 2* (PÁGS. 1570- 1597). LIMA : EDICIONES LEGALES.

NEYRA FLORES, J. A. (2015). *TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL.* LIMA:

IDEMSA.

OSSORIO, M. (2012). *DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES.* BUENOS AIRES: HELIASTA

PEÑA CABRERA FREYRE, R. (2012). *DERECHO PENAL. PARTE ESPECIAL*. LIMA: GRIJLEY.

PEÑA CABRERA FREYRE, R. A. (2016). *MANUAL DE DERECHO PROCESAL PENAL*. LIMA: PACIFICO EDITORES S.A.C.

PÉREZ SARMIENTO, L. E. (2005). *FUNDAMENTOS DEL SISTEMA ACUSATORIO DE ENJUICIAMIENTO PENAL*. BOGOTA: TEMIS.

PICÓ JUNOY, J. (1998). *LA IMPARCIALIDAD JUDICIAL Y SUS GARANTIAS: LA ABSTENCION Y RECUSACION*. BARCELONA: BOSH.

ROXIN, C. (2007). *LA TEORÍA DEL DELITO, EN LA DISCUSIÓN ACTUAL*. LIMA: GRIJLEY.

RUIZ NAVARRO, P. (2012). *PROCESO ESPECIAL POR DELITOS DE EJERCICIO PRIVADO DE LA ACCION PENAL*. LIMA: GACETA PENAL.

SAN MARTÍN CASTRO, C. (2014). *DERECHO PROCESAL PENAL. 3° ED.* LIMA: GRIJLEY.

SAN MARTÍN CASTRO, C. (2015). *DERECHO PROCESAL PENAL LECCIONES*. LIMA: INSTITUTO PERUANO DE CRIMINOLOGIA Y CIENCIAS PENALES.

SÁNCHEZ VELARDE, P. (2009). *EL NUEVO PROCESO PENAL*. LIMA: IDEMSA.

SÁNCHEZ VELARDE, P. (2014). *EL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL*. LIMA: GRIJLEY.

TALAVERA ELGUERA, P. (2014). BREVES APUNTES SOBRE LOS PROCESOS ESPECIALES EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESA PENAL (NCPD). EN A. C.

CLAROS GRANADOS, *NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL. COMENTADO.*

VOL. 2 (PÁGS. 1553 - 1569). LIMA: EDICIONES LEGALES.

TRUJILLO, I. (2007). *LA IMPARCIALIDAD*. MEXICO: MEXICO D.F.

VILLANUEVA, V. C. (2015). *EL PROCESO PENAL PERUANO*. LIMA: PALESTRA EDITORES.

ANEXOS

ENCUESTA PARA LA MUESTRA

La presente encuesta es anónima, y que tiene como fin la realización de una investigación científica, denominada EL NUEVO MODELO PROCESAL PENAL Y LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON CELERIDAD, HUÁNUCO – 2016, cuya responsable es doña CARMEN CECILIA COOK GONZALES.

Sírvase marcar con una X la respuesta que considere correcta.

Función que cumple dentro del proceso penal:

- a) Juez b) Fiscal c) Abogado d) Litigantes

1. ¿Considera que el Nuevo Código Procesal Penal vigente desde el 01 de junio del 2012, ha mejorado el sistema de impartición de Justicia?

- a) Si b) No c) No sabe d) No opina

2. ¿Considera el Principio de Celeridad Procesal es elemental dentro del Proceso Penal?

- a) Si b) No c) No sabe d) No opina

3. ¿Considera que la capacitación de los jueces es adecuada para la aplicación del Código Procesal Penal?

- a) Si b) No c) No sabe d) No opina

4. ¿Considera que el personal asistencial del Módulo del Código Procesal Penal es el adecuado para la impartición de justicia con celeridad?

- a) Si b) No c) No sabe d) No opina

5. ¿En caso de haber respondido en forma negativa la pregunta 4, diga Ud. que elementos se debe tener en cuenta para la capacitación de los jueces?

- a) Diligencia debida, no reprogramar audiencias
 - b) Capacitación en soluciones alternativas de conflictos
 - c) Capacitación en desarrollo de audiencias para evitar su repetición por nulidad
 - d) Capacitación en expedición de sentencias (motivación y fundamentación) para evitar nuevos juicios orales
 - e) Capacitación en gestión de despacho, control de personal asistencial
6. ¿Qué, problemas considera Ud., son lo que afectan el Principio de Celeridad en la impartición de justicia, respecto a los jueces durante el proceso penal?
- a) Falta de jueces
 - b) Reprogramación de audiencias
 - c) Falta de conocimiento en materia de derecho penal y procesal penal
 - d) Falta de control en el personal asistencial.
 - e) No admite la posibilidad de solución anticipada de conflictos como Terminaciones Anticipadas o Conclusiones Anticipadas.
7. ¿Qué fortalezas encuentra Ud. en el trámite del Nuevo Proceso Penal?
- a) Informatización y sistematización del proceso penal
 - b) Digitalización de los procesos
 - c) Oralidad
 - d) No sabe
 - e) No opina
8. ¿Qué, debilidades encuentra Ud. en el trámite del Nuevo Proceso Penal?
- a) Falta de órganos jurisdiccionales
 - b) La carga procesal

c) Falta de recursos humanos (personal asistencial del Juez)

Gracias

